

Redes-Proyectos de
Investigación
**“Procesos sociales
y políticos de
América Latina”**



Tomo 2

**Actores sociales y
políticos en tiempos
de Neoliberalismo.
Miradas locales a
veinte años del 2001.**

Autores:

María Susana Bonetto
Juan Manuel Reynares
María Luz Ruffini
María Virginia Tomassini
Iván Baggini
Celia Basconzuelo
María Virginia Quiroga
Agripino Souza Coelho Neto

ISBN 978-987-4993-90-8



Actores sociales y políticos en tiempos de neoliberalismo: miradas locales a veinte años del 2001 / María Susana Bonetto... [et al.]. - 1a ed. - Villa María: Universidad Nacional de Villa María. Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales, 2023.

Libro digital, PDF

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-987-4993-90-8

1. Procesos Sociales. 2. Análisis de Políticas. 3. Política Latinoamericana. I. Bonetto, María Susana.
CDD 320.098

Universidad Nacional de Villa María

Abog. Luis Negretti
Rector

Dra. Elizabeth Theiler
Vice Rectora

Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales

Mgtr. Gabriel Suárez Fossaceca
Decano

Esp. Abog. María Virginia Achad
Secretaria Académica

Dra. Carla Avendaño Manelli
Secretaria de Investigación y Extensión

Centro de Estudios Latinoamericanos del Centro – CELC

Dra. Virginia Tomassini
Coordinadora

Convocatoria:
Redes de Cooperación sobre “Procesos Sociales y Políticos en América Latina”
(2021 – 2022)

Resolución Decanato IAPCS – UNVM N° 061/2021

Coordinación editorial
Dra. Virginia Tomassini
Dra. Elizabeth Theiler
Dra. Carla Avendaño Manelli

Villa María - Córdoba – República Argentina –2022

Presentación

Por *Los autores* 5

Capítulo 1

Neoliberalismo, democracia y transformaciones desde lo local: una mirada histórica y situada del 2001 en Argentina

Por *María Susana Bonetto y María Luz Ruffini* 10

Capítulo 2

Hacer política local durante la crisis del 2001

Por *A Juan Manuel Reynares y María Virginia Tomassini* 22

Capítulo 3

La protesta social y sus colectivos protagonistas en Río Cuarto y Villa María (diciembre 2001-febrero 2002)

Por *María Virginia Quiroga, Celia Basconzuelo e Iván Baggini* 34

Capítulo 4

Os sentidos das escalas geográficas para as Ações Coletivas

Por *Agripino Souza Coelho Neto* 52

Presentación

En el año 2021 constituimos la red de cooperación “Actores sociales y políticos en tiempos de neoliberalismo. Dinámicas y articulaciones en espacios subnacionales de América del Sur”, en el marco de la convocatoria auspiciada por la Universidad Nacional de Villa María denominada Procesos Sociales y Políticos en América Latina, según Res.N°135/21.

Las redes de cooperación académica son instancias de asociación alrededor de propósitos siempre mancomunados y de apoyo a la construcción colaborativa del conocimiento científico, que reúne entre otros actores a las universidades y centros de investigación. En las últimas dos décadas pueden reconocerse diversos alicientes procedentes tanto de políticas universitarias como de iniciativas particulares que han favorecido la constitución de redes tanto informales como institucionalizadas con distinto grado de relevancia, impacto y ritmo de sostenimiento en el tiempo. Varias de ellas han tenido como espacio de articulación las universidades en el Mercosur y han avanzado en la promoción de las actividades de extensión fortaleciendo los vínculos con las respectivas sociedades (Basconzuelo y Souza Coelho Neto, 2016).

En acuerdo con estas novedosas tendencias de cooperación interuniversitaria a escala de Mercosur, con antecedentes en la materia y en línea con la propuesta de la universidad villamariense, se dio entidad institucional a una red de cooperación integrada por la sede convocante, junto con la Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Nacional de Río Cuarto (Argentina) y Universidade do Estado da Bahia (Brasil). Cada una de ellas aportó sus respectivos grupos de investigación participantes, al interior de los cuales se delinearon equipos coordinadores y colaboradores, respectivamente, con sus roles y funciones, a la vez que representaban líneas de investigación específicas pero confluyentes en torno a los actores sociales y políticos en tiempos del neoliberalismo.

El propósito de esta red de cooperación es socializar y profundizar los estudios en torno a procesos de identificación de diversos actores colectivos en los espacios subnacionales, con foco en el impacto que las lógicas del neoliberalismo produjeron en sus prácticas, modos de representación, autopercepción e interpretación de sus entornos. En este sentido, se hace necesario un ejercicio crítico y deconstructivo de la racionalidad universalista e individualista que, en ciencia política en particular y en las Ciencias Sociales en general, ha dominado los estudios sobre la democracia, los actores sociopolíticos y las instituciones. En esa dirección, nuestra Red se sostiene a partir de una mirada atenta a las problemáticas específicamente latinoamericanas, asumiendo un posicionamiento onto-epistémico y político particular.

La relevancia de trabajar en red cooperativa consiste en dar cuenta de procesos políticos democráticos en América Latina, a partir de categorías teóricas que intentan atrapar su especificidad, y en particular considerar los nuevos modos en que éstos podrían contribuir a una profundización democrática, más allá de los marcos teóricos que han proporcionado criterios evaluativos normativos clásicos. Así, el intercambio a través de la Red permite reconocer en contextos institucionales y simbólicos singulares, las experiencias históricas recientes que -luego de la profunda crisis de los modelos neoliberales de los 90 y la posterior emergencia, proliferación y articulación de nuevas demandas y antagonismos- podrían constituir una reconfiguración significativa de los escenarios políticos nacionales y subnacionales donde se disputan proyectos antagónicos.

La dinámica actual del capitalismo nos sitúa frente a una transformación radical en los modos en que se establecen las subjetividades políticas y los espacios de representación. Para dar cuenta de ella, se hace necesario recuperar analíticamente la dimensión discursiva de la práctica política, en un doble sentido. Por un lado, en la disputa por la definición de lo legítimo en términos colectivos al interior de un terreno indecidible, tal como han teorizado, por ejemplo, Laclau y Mouffe (2005). Y por el otro, en la constitución provisoria de subjetividades políticas en torno a la falla constitutiva del sujeto (Stavrakakis, 2007, 2010).

De este modo, el neoliberalismo es entendido en la presente obra en red interuniversitaria como una lógica política: una construcción simbólica que, a su vez, trastoca los elementos que componen al lazo social en tanto discurso, provocando entonces efectos en el modo en que se entablan las relaciones sociales y se producen subjetividades políticas en la actualidad (Lacan, 2012; Alemán, 2018; Soler, 2017; Stavrakakis, 2020).

En este marco de comprensión contextualizado por el neoliberalismo es necesario también analizar los procesos de reconfiguración de actores sociales y políticos colectivos que se han visto atravesados en sus perfiles históricos y en sus prácticas como consecuencia de las políticas macroestructurales y de sus propias lógicas constitutivas. Antiguos y nuevos sujetos de acciones colectivas complejas y diversas disputan espacios, proyectan identidades, anudan y desanudan redes de interacción a la vez que expresan las tensiones del sistema, revalidando su representación en distintas escalas (Quiroga, 2015; 2018; Basconzuelo y Quiroga, 2018-2019)

Como parte del trabajo mancomunado de la Red, algunas instancias de nuestra historia cercana se constituyen como objetos privilegiados para enfocar allí el análisis de los procesos sociales y políticos contemporáneos. 2001, año emblemático, ha trascendido en la memoria colectiva, principalmente, por el ciclo álgido de protestas que signaron el final de la presidencia de Fernando de la Rúa (1999-2001) y evidenciaron las dificultades para construir respuestas ante la situación de multicrisis generalizada. Hemos abordado la crisis de 2001, en este caso, como coyuntura paradigmática donde se puede observar el devenir de los actores sociales y políticos en clave local. Consideramos que en ese entonces se pusieron en discusión los marcos de sentido donde encuadraban sus repertorios y acciones, intentándose romper con el predominio de las lógicas neoliberales.

A su vez, y teniendo en cuenta las acciones cooperativas en la red interuniversitaria, nuestro enfoque de análisis se desarrolla mediante una metodología de aplicación que, entre otras, propicia la comunicación pública del conocimiento generado por las investigaciones en curso. En este sentido, la propuesta del conversatorio sobre esta coyuntura crítica, que llevó por título “El 2001 en las miradas locales. Voces, sentidos, experiencias”¹, nos permitió reflexionar acerca de nuestra historia reciente, rememorando un período signado por tensiones, disputas, propuestas alternativas y resistencias al cambio. Al mismo tiempo, aportó miradas multiescalares y, quizás, federales ya que los protagonistas de esos sucesos relataron lo vivenciado en dos espacios locales del interior de la Argentina, como son las ciudades de Río Cuarto y Villa María en la provincia de Córdoba. Esta obra recoge el análisis de los investigadores sociales que integran la red a la vez que la óptica de los protagonistas de aquellos episodios del 2001. De este modo, la divulgación científica

¹Avalada por la Secretaría de Vinculación Social e Institucional, el CEGRA y el Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNRC se implementó una actividad en noviembre de 2021, de manera virtual, que contó con la participación de funcionarios públicos y referentes sociales quienes se manifestaron en torno a los sucesos del 2001.

se retroalimenta de esa vinculación de la academia con la sociedad, tan necesaria para una construcción democrática de los saberes sociales.

Esta compilación reúne así cuatro trabajos que reflexionan sobre diversos aspectos de las dinámicas políticas y sociales en contextos situados, en momentos críticos. Bonetto y Ruffini proponen en el capítulo “Neoliberalismo, democracia y transformaciones desde lo local: una mirada histórica y situada del 2001 en Argentina” reconstruir las maneras en que se configuraron localmente prácticas y sentidos vinculados a lo mejor de la tradición democrática participativa, capaces de tensionar con las lógicas políticas y de subjetivación neoliberales. Desde un enfoque situado, centrado en la noción de “lugar”, como entramado hegemónico de relaciones sociales, abordan las experiencias de las ciudades de Villa María y Río Cuarto en el año 2001 como envolturas de espacio-tiempo particulares, a partir de testimonios de agentes estatales y militantes sociales.

En “Hacer política local durante la crisis del 2001” Reynares y Tomassini analizan cómo en ese contexto crítico los actores dieron sentido a su accionar político. Para ello, analizan los modos en que la construcción significativa “hacer política local” fue resemantizada rastreando las narrativas disponibles con las que se articuló desde cada una de las posiciones sociales involucradas. A partir de la teoría política del discurso prestan particular atención a las dinámicas simbólicas mediante las cuales la práctica política local se cargó de sentido en una instancia de dislocación extrema del orden social vigente. El análisis sobre los relatos distingue, por un lado, las significaciones presentadas por los funcionarios de las áreas de acción social de cada municipio y por el otro, los y las militantes territoriales, sindicales y universitarias, considerando a su vez los efectos de la crisis evocados por estos actores y los modos en que incidieron en su práctica política posterior.

El capítulo de Quiroga, Basconzuelo y Baggini, “La protesta social y sus colectivos protagonistas en Río Cuarto y Villa María (diciembre 2001-febrero 2002)”, propone visitar la crisis del 2001 desde el prisma de los actores colectivos movilizados en las ciudades de Río Cuarto y Villa María, especialmente en la coyuntura diciembre 2001- febrero 2002. Sus autores parten de sentar algunas precisiones conceptuales en cuanto a las protestas sociales, los ciclos de protesta y los actores colectivos. Luego, intentan abordar algunos interrogantes clave en el camino de articular la teoría con los hallazgos empíricos: ¿Quiénes emprendieron las acciones colectivas en las localidades mencionadas? ¿En qué contexto y escala desarrollaron sus iniciativas? ¿Cómo se organizaron? ¿Cuáles fueron los repertorios predominantes?

Finalmente, trasladándose al espacio brasileño y con base en las experiencias sociales del territorio de Sisal, localizado en el noreste bahiano, Souza Coelho Neto en su contribución “Os sentidos das escalas geográficas para as açõescoletivas”, aporta una reflexión sobre los sentidos que dichas escalas tienen para las prácticas socio espaciales a partir del estudio de asociaciones barriales, asociaciones comunitarias rurales, así como también de cooperativas de producción. Se abordan las redes socio-territoriales por su papel en las solidaridades comunitarias, las relaciones de vecindad y de cooperación y su impacto en la escala local y regional.

El conjunto de los capítulos revela interesantes convergencias alrededor de temáticas complementarias. Por un lado, la centralidad que ocupan en cada capítulo los actores colectivos y su estudio en las escalas locales mediante enfoques que, si bien diferenciados y provenientes de distintas ramas de las ciencias sociales (teoría política, historia social, discurso político, geografía), expresan un común interés por abordar prácticas (políticas, contenciosas), sentidos y subjetividades y formas organizativas de complejos y diversos colectivos sociales.

De allí que, los capítulos referidos a la crisis del año 2001, constituyen un aporte significativo al presentar interpretaciones sobre aristas de un proceso complejo como el ciclo de protesta mediante la convergencia de preocupaciones comunes. El análisis de actores colectivos se profundiza en su conformación y transformación en aquel contexto, al establecer redes novedosas

en la contención de poblaciones atravesadas por múltiples necesidades. Las contribuciones de esta compilación se detienen en una caracterización de su repertorio de acciones, conjugándolo con un rastreo de los sentidos evocados para interpretar aquellos días y los impactos de esa experiencia en las memorias construidas sobre el accionar político local. Ello, a su vez, habilita una reflexión sobre las múltiples racionalidades alternativas imbricadas en los territorios específicos.

Por otro lado, cada contribución no deja de pensar en las articulaciones y conexiones que estos actores construyen tanto al interior de los espacios subnacionales como en los escenarios macro. Lo local y lo territorial como clave analítica de la protesta, subraya la relevancia del estudio en un nivel micro que no se piensa aislado de los contextos sino en relación consustancial con el mismo para delinear explicaciones que no se limiten a una visión estructural de los procesos y prácticas sociales. Ello permite complejizar los antecedentes existentes sobre la crisis del 2001 en términos nacionales y provinciales.

Como cierre a estos puntos de convergencia puede añadirse la importancia que se otorga a la aproximación metodológica, que en todos los casos apela a un pluralismo metodológico y construcción de nociones conceptuales y discusiones teóricas emergentes desde el trabajo de campo explícito y subyacente en cada investigación. La adopción de una postura ontológica y epistémica relacional tiene como connotación el diseño de enfoques metodológicos múltiples que se desagregan en cada capítulo y que otorgan una amplitud analítica al objeto de estudio que lo enriquece a partir de reflexiones que se articulan en ese diálogo fructífero entre la teoría y los datos. En efecto, en su construcción, los datos dan origen a la teoría emergente que valida los resultados y aportes de las investigaciones a través del desarrollo específico de cada proceso de indagación, lo que se constituye en una característica destacada del trabajo colectivo. Además, la teoría emergente, permite pensar en nuevos enlaces analíticos con la teoría disciplinar y general de las Ciencias Sociales, lo que se constituye en otro aporte de esta publicación y en una senda que debemos tener presente metodológicamente al revisitar la sociedad y sus conflictos.

Los autores
Agosto 2022

Bibliografía

- Alemán, J. (2018). *Capitalismo: crimen perfecto o emancipación*. España: Nuevos Emprendimientos Editoriales.
- Basconzuelo, C. y Souza Coelho Neto, A. (2016). Redes académicas interuniversitarias en Mercosur: el papel de la extensión. *Integración y Conocimiento. Revista del Núcleo de Estudios e Investigaciones en Educación Superior del Mercosur*, 2 (5), 98-110. Recuperado de:
<https://revistas.unc.edu.ar/index.php/integracionyconocimiento/article/view/15730/15560>
- Basconzuelo, C. y Quiroga, M. V. (2018-2021). Hacia un mapeo de la protesta social en ciudades intermedias y agro-universitarias de la provincia de Córdoba. Río Cuarto y Villa María en coyunturas históricas recientes y conflictivas (1989-2003). Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID), del Programa de Generación de Conocimientos (PGC 2018). Con subsidio otorgado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba, Mincyt, por Resoluc. N° 144, Anexo 1, Número 65.
- Lacan, J. (2012). *El Seminario, libro 17: El reverso del psicoanálisis* (texto establecido por J-A Miller). Argentina: Paidós.
- Laclau, E. y Mouffe, Ch. (2005 [1985]). *Hegemonía y Estrategia Socialista. Hacia una radicalización de la democracia*. Argentina: Fondo de Cultura Económica.
- Quiroga, M.V. (coord.). (2015). *Organizaciones socio-políticas y territoriales. Hacia una cartografía en la ciudad de Río Cuarto 2014-2015*. Argentina: UniRío.
- Quiroga, M.V. (2018). Al calor de la movilización social. América latina entre los siglos XX y XXI. En: L. Rubiolo y M. Tamagnini (comps.), *Historia discute Historia* (pp. 23-32). Argentina: UniRío.
- Stavrakakis, Y. (2007). *Lacan y lo político*. Argentina: Prometeo-UNLP.
- Stavrakakis, Y. (ed.) (2020). *Routledge Handbook of Psychoanalytic Political Theory*. United States: Routledge.
- Soler, C. (2017). Discurso capitalista. En: C. Pascual Maza, et al., *Los discursos de Lacan* (pp. 135-151). España: Colegio de Psicoanálisis de Madrid.

Capítulo 1: Neoliberalismo, democracia y transformaciones desde lo local: una mirada histórica y situada del 2001 en Argentina

María Susana Bonetto
María Luz Ruffini

Resumen

Los sucesos en la Argentina de 2001 pueden ser comprendidos como una fuerte reacción popular que intentó romper con el predominio de las lógicas neoliberales, tanto como modalidad de ejercicio de poder como en cuanto conjunto de transformaciones institucionales y de política pública, entendiendo que ambas dimensiones fueron operativas en ese espacio-tiempo históricos para afianzar un nuevo modelo de acumulación. Los orígenes de este proceso deben ser rastreados, al menos, desde la última dictadura militar, a partir de la cual iniciaría la casi irreversible derrota de la llamada “Alianza Nacional Popular”. En este trabajo, dedicaremos los primeros apartados al abordaje de la progresiva consolidación de una nueva hegemonía en Argentina desde la última dictadura militar y sus efectos sociales, económicos y políticos. Asimismo, si entendemos al neoliberalismo no sólo como un conjunto de directrices de política económica, sino también como un orden normativo debemos asumir también que éste no es intransformable, y el análisis de sus particulares formas de instanciación y transformación desde un enfoque situado conformará la segunda parte de este escrito. Así, buscaremos reconstruir las maneras en que se configuraron localmente prácticas y sentidos vinculados a lo mejor de la tradición democrática, capaces de tensionar con las lógicas políticas y de subjetivación neoliberales.

Palabras clave: neoliberalismo; democracia; hegemonía; contraconductas; lugares

Neoliberalismo, democracia y transformaciones desde lo local: una mirada histórica y situada del 2001 en Argentina

**María Susana Bonetto
María Luz Ruffini**

Introducción

Es ya un lugar común en las ciencias sociales críticas el considerar la enorme polisemia del concepto *neoliberalismo*, que puede ser sistematizada de modo muy general en dos grandes enfoques o acepciones. En primer lugar, aparecen aquellos abordajes que se centran en el análisis de las políticas económicas (regresivas, expoliadoras, anti-soberanas) que resultan constitutivas de un Estado Nación gobernado por sectores que promueven el neoliberalismo en la economía, la sociedad y -por supuesto- la vida política. En segundo lugar, encontramos aquel conjunto de perspectivas que, nutriéndose de los aportes foucaultianos para pensar lo político y el poder, reconocen al neoliberalismo como una racionalidad política, una forma de ejercicio del poder con una lógica específica que contribuye a configurar condiciones particulares de producción de subjetividades.

Así, la racionalidad neoliberal se caracterizaría por orientarse hacia la extensión de “forma empresa” a una miríada de relaciones sociales (Foucault, 2007). Es sobre esta base que se funda el innegable proceso empresarización de instituciones educativas, entidades de salud, organismos de administración pública... y también -y quizás más importante- comienzan a profundizarse los efectos de la figura subjetiva del “empresario de sí”, según la cual cada persona debe entenderse como una pequeña empresa que busca potenciarse, maximizar sus utilidades y minimizar los riesgos al modo del capital, todo lo cual genera una dinámica social muy particular.

En este marco, los sucesos en la Argentina de 2001 pueden ser comprendidos como una fuerte reacción popular -quizás la última de esas características- que intentó romper con el predominio de las lógicas neoliberales en Argentina, como modalidad de ejercicio de poder y como conjunto de transformaciones institucionales y de política pública, entendiendo que ambas dimensiones fueron operativas en ese espacio-tiempo históricos para afianzar un modo de acumulación refractario a la igualdad y la participación democrática transformadora (Brown, 2016). En rigor, los orígenes de este proceso deben ser rastreados mucho antes: es de sobra conocido que la dictadura militar de 1976 produjo efectos de enorme magnitud, no sólo en la estructura económica sino sobre el sistema político, las formas sociales participación y el sentido común, delineando la casi irreversible derrota de la llamada “Alianza Nacional Popular”. La descomposición de este esquema fue uno de los efectos -y motivaciones- más relevantes de la última dictadura y, como veremos, su progresiva disolución permite comprender buena parte de los fundamentos estructurales de las sucesivas crisis políticas y económicas que eclosionaron en el estallido de 2001. Pero veamos con mayor detenimiento esta cuestión.

Según Guillermo O'Donnell (1997), el peronismo histórico se construyó sobre la base de un “empate hegemónico” entre la denominada Alianza Nacional Popular, conformada por la CGE (Confederación General Empresaria), la CGT (Confederación General del Trabajo) y la conducción nacional de los principales sindicatos y la Alianza Liberal Oligárquica, que nucleaba los grandes centros de poder económico nacionales e internacionales junto con el sector agrario concentrado. Desde ese momento, comenzaría a configurarse una nueva hegemonía, inhibitoria de toda reacción que cuestionase o pudiese impedir el predominio de la valorización financiera como nuevo patrón de acumulación: asistimos a la consolidación de un nuevo sistema político que permitió la captación incluso de fuerzas políticas tradicionalmente contrarias al nuevo sistema de dominación.

La Alianza Nacional Popular defendía, claro está, la industrialización y desarrollo de los sectores industriales pequeños y medianos, nacionales e internistas, buscando acotar la inserción del capital extranjero. No obstante, el gobierno militar que accede por la fuerza al poder en la década del '70 produjo el aniquilamiento de gran parte de los cuadros políticos y sociales que la sostenían. Asimismo, el proceso dictatorial abrió el camino para que, incluso luego del restablecimiento de la democracia, el propio régimen constitucional pudiera fácilmente articularse con la expansión del nuevo patrón de acumulación, continuando la tarea dictatorial por otros medios: aportando decisivamente a la construcción de consenso sobre su aceptación. Al somero abordaje de este proceso, la progresiva consolidación de una nueva hegemonía en Argentina desde la última dictadura militar y sus efectos sociales, económicos y políticos dedicaremos los puntos 1) y 2) del presente escrito.

Ahora bien: si entendemos al neoliberalismo, como dijéramos, no sólo como un conjunto de directrices de política económica, sino también y más ampliamente como un orden normativo de la razón dominante a nivel global desde la segunda mitad del siglo XX (Brown, 2016), es claro que éste, en tanto transforma cada dominio de la vida social de acuerdo con una imagen específica de lo económico, tiende a anular silenciosamente elementos básicos de la democracia: vocabularios, principios de justicia, culturas políticas, hábitos de ciudadanía, prácticas de gobierno y, sobre todo, imaginarios democráticos.

No obstante, ello no supone que debamos entender al neoliberalismo como un devenir inevitable e intransformable: la experiencia histórica muestra que, entramadas con éste podemos encontrar no sólo otras racionalidades, sino también asistir a la emergencia de “contraconductas”, prácticas, sentidos, modos de subjetivación que tensionan con la generalización ubicua de la forma empresa (Foucault, 2007). Y, desde nuestra perspectiva, el estudio de estas construcciones representa un desafío analítico de primer orden: debemos tematizar su emergencia en el marco de las relaciones de poder que son su condición eludiendo cualquier noción de exterioridad o ajenidad, al tiempo que es central reconocer y mensurar su potencial de crítica y transformación.

Para ello, propondremos un enfoque situado, centrado en la noción de “lugar” como entramado hegemónico de relaciones sociales (Massey, 2007), en el marco de lo cual abordaremos las experiencias de las ciudades de Villa María y Río 4° en el año 2001 como envolturas de espacio-tiempo particulares. Sobre esa base, a partir de testimonios de agentes estatales y militantes sociales, buscaremos reconstruir las maneras en que se configuraron localmente prácticas y sentidos vinculados a lo mejor de la tradición democrática, capaces de tensionar con las lógicas políticas y de subjetivación neoliberales. Esto configurará el apartado 3) de este capítulo. Finalmente, añadiremos unas pocas reflexiones en torno a la actualidad de estos análisis históricos y situados para pensar el presente y sus posibilidades de transformación.

La dictadura militar y la transición democrática

Es bien sabido que, apoyándose en la represión generalizada, la última dictadura militar en Argentina demolió las bases, referentes y estructuras de la Alianza Nacional Popular, así como también puso freno a los procesos de industrialización sustitutiva que avanzaban desde los años 30 en nuestro país (Basualdo, 2002). Desde ese momento se suspendió el proceso de desarrollo industrialista y comenzó a imponerse el modelo de acumulación financiera, ya dominante en buena parte del planeta.

Al respecto, Basualdo (2002) sostiene que en Argentina el papel del Estado fue fundamental en esta transformación, al menos por tres motivos: a través del endeudamiento interno éste mantuvo una elevadísima tasa de interés en el sistema financiero local respecto a la vigente en el mercado internacional; mediante la deuda externa proveyó las divisas fundamentales para la fuga de capitales y, finalmente, en tanto asumió como propia la deuda externa del sector privado incorporó una nueva transferencia concentradora de recursos (Basualdo, 2002). Para el autor, en efecto, la toma de deuda externa y la fuga de capitales mantienen una relación causal que se expresa en la evolución de ambas variables, lo que resulta concomitante con una brutal redistribución de ingresos en contra de los asalariados.

Cabe mencionar que los principales beneficiarios no fueron todos los empresarios sino un selecto número de grupos económicos locales: Perez Companc, Macri, Loma Negra, Roggio y un conglomerado de empresas extranjeras: Techint, Bemberg, algunas automotrices. Asimismo, los voceros intelectuales que tuvieron a su cargo la expansión y profundización del consenso sobre el nuevo sistema de acumulación se nuclearon de forma central en la Fundación Mediterránea bajo la dirección de Domingo Cavallo, en Córdoba, y la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), en Buenos Aires.

De esta manera, el “Estado terrorista” (Duhalde, 1999) no sólo desmanteló las bases políticas de la Alianza Nacional Popular, impulsó la concentración del poder económico en el marco de la valorización financiera y golpeó de muerte a la industria nacional orientada al mercado interno, sino que destruyó el poder de la clase trabajadora y los sectores populares, lo que se ve claramente en la impresionante baja salarial que siguió inmediatamente al golpe de 1976: 45% por debajo del nivel previo. Por otra parte, la despolitización ciudadana y el fortalecimiento de los sentidos sociales individualistas y privatistas llevaron al desmantelamiento de gran parte de los mecanismos populares de acción colectiva y representación política, con auxilio de los medios de comunicación que aportaron fuertemente a la producción un consenso legitimador de las medidas dictatoriales.

Ya a partir de 1982 dio inicio en América Latina la década denominada de “crisis de la deuda externa”, lo cual tuvo un impacto central en el primer gobierno democrático (Basualdo, 2000). Al mismo tiempo, poco se plantea que los condicionamientos y limitaciones económicas del primer gobierno democrático no sólo radicaron en la magnitud de los recursos que se utilizaron para pagar lo adeudado a los acreedores sino también en la oportunidad que tuvieron los grupos económicos locales y conglomerados extranjeros de ser los principales beneficiarios de los ingresos extraídos de los asalariados. En tal contexto, los pagos de la deuda no fueron la única ni la más importante transferencia de recursos al exterior: la fuga de capitales que llevaron a cabo los grupos económicos locales y las distintas fracciones del capital extranjero alcanzó una magnitud equivalente o, incluso, superior.

En rigor, pareciese que el mayor problema en el manejo de la economía del primer gobierno democrático fue su rotunda incapacidad para comprender las modificaciones estructurales que se habían registrado en la economía argentina, que distanciaban definitivamente su funcionamiento de aquel bien conocido de la segunda etapa de sustitución de importaciones. Es notable que equipos

económicos de gran solvencia técnica no admitieran la magnitud e importancia de la fuga de capitales y su dinámica particular, en el marco de la cual los sectores dominantes mantuvieran e incrementaran las prebendas obtenidas.

En consecuencia, la consolidación del nuevo patrón de acumulación financiera avanzó, por un lado, en tanto la concepción económica estructural gubernamental se encontraba alejada de la realidad, impidiéndole constituir una alianza social capaz de modificar el patrón de acumulación financiera. Por otra parte, la fracción local de los sectores dominantes -asociada con otras formaciones empresarias- inició negociaciones para subordinar la acción gubernamental mediante tratativas directas con el partido de gobierno. Así, asistimos no sólo al ejercicio de cierta extorsión económica sino a la puesta en movimiento de un nuevo proceso de cooptación y negociación política y económica, en el marco del cual adquieren centralidad los denominados “operadores políticos”. Este conjunto de factores nos permite, entonces, contar con elementos para avanzar en la comprensión de la crisis inflacionaria de 1989 e identificar los intereses que promovieron las profundas modificaciones de los años 90.

La crisis hiperinflacionaria puede ser entendida como un fenómeno a través del cual se buscó remover las restricciones estructurales que impedían el desarrollo definitivo del patrón de acumulación basado en la valorización financiera iniciado en la dictadura militar (Basualdo, 2002): la salida mentada para dicha crisis basó su pretensión de legitimidad en el combate contra el modelo “populista y fascista, centralizado y estatista” (Programa del pueblo de 1987). La definición de este camino puede entenderse, en primer término, a partir de la presión de los grupos económicos dominantes y -sobre todo- los conglomerados extranjeros, defensores a ultranza del plan Thatcher de aplicación de programas de conversión de deuda a cambio de activos fácticos, base de la privatización de las empresas públicas.

Ahora bien: ¿Cómo se produjo la derrota de la alianza Nacional Popular y el comienzo de una nueva etapa económica y política? Desde la ciencia política se asume que junto con la recuperación democrática se produce una resignificación del Estado, lo que se ve con claridad en los discursos epocales, entre los que se cuentan las señeras reflexiones de Norbert Lechner (1981), quien sostiene que esa reconstrucción se produce en un contexto en el que se pensaba “desde la derrota”. En ese marco, encontramos un grave déficit teórico y epistemológico, a partir de lo cual las experiencias revolucionarias y aún reformistas de los años 70 son revisadas de manera negativa, sustituyéndose apresuradamente estas reflexiones por una hegemonía del concepto liberal de democracia en el campo académico: la democracia como proyecto transformador sólo es concebido en relación a la importancia de rebasar el insostenible orden dictatorial sufrido.

La transición democrática en Argentina se halla signada, así, por la preeminencia de conceptualizaciones democráticas basadas, en gran medida, en la recuperación de argumentaciones puramente institucionalistas. Desde ese punto de partida se redefine al Estado como Estado de Derecho, revalorizando las formas y procedimientos garantes del orden constitucional, pero haciendo abstracción de las relaciones y estructuras económicas igualitarias y/o redistributivas que son condición de posibilidad de una democracia participativa y centrada en el autogobierno -recuperando la tradición regional-. Vemos, en suma, cómo se articula una relación que podemos llamar de “mutua domesticación” entre Estado y Democracia, en la cual los resguardos liberales suavizan la soberanía popular al tiempo que el Estado delimita el uso de la fuerza y se compromete a la protección de los derechos.

El período menemista

En este segundo gobierno democrático, a pesar de un primer intento de alianza con el capital concentrado interno en detrimento de acreedores externos, los segundos pudieron imponer una serie de reformas destinadas a modificar drásticamente la estructura del sector público y la orientación de las transferencias de los recursos estatales (Basualdo, 2002). Una de las primeras medidas del nuevo gobierno fue la Ley de Emergencia Económica, destinada a eliminar subsidios, reintegros impositivos y distintas transferencias que el sector público dirigía hacia algunos sectores sociales. Asimismo, la Ley de Reforma del Estado supuso la intervención de las empresas estatales, fijando un cronograma para la transferencia de los activos públicos al sector privado y la conversión de la deuda externa -lo que permitió la capitalización de títulos de deuda por parte de los capitales extranjeros y grupos económicos dominantes locales- (Basualdo, 2002).

El desenlace de la primera etapa menemista se produjo en diciembre de 1989, cuando el incremento del tipo de cambio y las tarifas públicas produjeron una segunda hiperinflación que terminó con la conducción económica. A partir de allí comenzaría una compleja transición que terminaría en 1991 con un recambio ministerial y el lanzamiento, por parte de Domingo Cavallo, del Plan de Convertibilidad. Es posible asumir, sobre esta base, que en este período se produjo la consolidación del patrón de acumulación financiero, superando todos los escollos estructurales.

Políticamente -siguiendo a Gramsci- Basualdo entiende que durante este período los dos partidos centrales del sistema político se incorporaron a la órbita de los sectores dominantes, descabezando a vastos sectores sociales que, desencantados ante la pérdida de la identidad social histórica que los definía sufrieron un fuerte proceso de desafiliación política e identitaria que llevaría a un notable vaciamiento de la política, una fuerte pérdida de confianza en los políticos y el declive del interés y la participación popular en los asuntos públicos.

En este contexto, coincidiendo con Casullo (2007) sólo importaba “la gente”, la televisión y otros medios de comunicación suplantaron las discusiones políticas, los proyectos y los partidos en la discusión pública- política. Sólo se consideraron relevantes los derechos individuales, en el marco de una arquitectura institucional estatal refractaria a la atención de las necesidades colectivas y la construcción de identidades políticas comunes. La política se transforma así, sin resguardos, en la gestión del mercado, y el Estado sólo es concebido como ejecutor político orientado al acompañamiento de las políticas impuestas por los organismos internacionales.

Para Atilio Borón (2003) el neoliberalismo de los años '90 produjo políticas conservadoras fragmentadas, marginación, ruptura del tejido social y degradación de la política. Esto coincide con el hecho de que los poderes económicos adquirieron una homogeneidad inédita: los grupos económicos locales, las empresas extranjeras y la banca trasnacional se configuraron como “una sola comunidad de negocios” (Basualdo, 2002). No obstante, a partir del control de la inflación y la expansión del crédito, se generó un ciclo expansivo de consumo interno que incorporó a vastos sectores sociales, dando lugar a la etapa de mayor consenso social del nuevo modelo de acumulación.

A lo largo del último mandato de Menem, la concentración e independencia de los grupos económicos dominantes terminaron de descargar sobre el resto de la sociedad toda la magnitud de la crisis, empeorando sustancialmente las ya precarias condiciones de vida de los asalariados ante el proceso de reducción sufrido en años precedentes por los resguardos estatales para el bienestar social y la creciente pauperización generalizada. Ante este escenario, políticamente se profundiza la disidencia entre Menem y el grupo de los 8 -peronistas que se oponen al menemismo- a partir de lo cual emergerán el FREPASO y el FRENTE GRANDE/Alianza. Sin embargo, aunque esta coalición finalmente triunfa electoralmente, no puede cumplir con las promesas realizadas como tercera fuerza

alternativa. Un primer error de apreciación fue que, derrotado el menemismo en tanto fuerza política que consolidó durante los 90 el predominio del sector financiero, todo podía ser revertido: no se advirtió la solidez de la hegemonía de la fracción local de los sectores dominantes internos, unida al control general del proceso económico impuesto por el FMI y los acreedores externos y sustentada por la extraordinaria capacidad de lobby de estos últimos sobre la economía y las políticas estatales.

Este estado de situación permite comprender que el gobierno de la Alianza, pese a auto-presentarse como una alternativa al menemismo, continuase con el modelo neoliberal de acumulación financiera, aumentando la concentración del ingreso y profundizando la recesión. El autoproclamado “progresismo” generó un nuevo avance de la degradación salarial, el desempleo, la pobreza y la indigencia producto de los ajustes ortodoxos. A ello se añadiría, con el objetivo de arrasar con el “costo de la política” y disminuir el gasto, un nuevo ajuste al sector público y un nuevo proceso de transferencia de activos públicos a manos privada. En palabras de Basualdo (2002: 99):

A medida que se profundiza la valorización financiera, queda socialmente más claro que la función prioritaria del Estado es únicamente asegurar el flujo de capitales y que la desregulación económica es, en lo fundamental, una transferencia al capital dominante del control sobre vastos espacios económicos. Así, los sectores excluidos advirtieron que ya nada se podía esperar del nuevo gobierno, ya que la política era una intermediaria de los programas de los poderes económicos internos y externos del nuevo modo de valoración financiera.

Llegamos de este modo a fines de la década del '90, cuando es posible observar la multiplicación e intensificación de las movilizaciones y protestas de diferentes sectores afectados por las políticas impuestas: puebladas, paros activos, cortes de rutas, ocupaciones de fábricas, amenazas de cierres de instalaciones educativas provinciales y universidades nacionales... Un conjunto de experiencias en general inorgánico, un tanto desanclado de identidades y estructuras políticas preexistentes y, por tanto, propicio para la ocurrencia de un estallido como el que alcanzó su cenit el 19 y 20 de diciembre de 2001, cuando que el pueblo en las calles derrocó un gobierno nacional encarnado en Fernando. De La Rúa y Domingo Cavallo, con el terrible costo de 39 muertos y centenares de heridos.

El estallido: lugares, transacciones, contraconductas

Desde nuestro punto de vista teórico, lo espacial puede ser definido como la esfera de yuxtaposición o coexistencia de distintas narrativas y el producto de relaciones sociales dinámicas. Así, los *lugares* pueden ser imaginados como articulaciones concretas de las mismas, incluyendo las relaciones locales y todas aquellas conexiones que se extienden más allá de éstas. Se trata de un lugar abierto, poroso, híbrido, del lugar como un punto de encuentro cargado de historias complejas y densas (Massey, 2012). En este sentido, nuestras dos localidades de referencia -Río Cuarto y Villa María- pueden entenderse como específicos anudamientos de relaciones que expresan una multiplicidad, siendo espacios que se hallan formados por una multitud de prácticas de reproducción, contestación y negociación cotidiana: podemos pensarlos, siguiendo a Estévez Villarino (2011), más como una controversia y una práctica que como una realidad dada, un concepto estable o una sustancia.

Es sobre esta base que podemos pensar en cómo ciertas lógicas o racionalidades políticas se instancian yuxtapuesta, compleja y contradictoriamente en una envoltura de espacio-tiempo particular, enredándose asimismo con los entramados cotidianos de la vida, con lo que se vuelve fundamental “[...] acercarse a la complejidad de las vidas cotidianas de los sujetos reales y vivos que hacen la historia, a las contradicciones y luchas emergentes, a las formas en que la vida es vivida”

(Grinberg, 2007: 106). En efecto: debemos no sólo poder aprehender las lógicas de ejercicio del poder dominantes en un momento histórico, las racionalidades que logran imponerse, sino también los procesos emergentes, luchas y resistencias diarias, con sus complejidades y contradicciones.

A este respecto, es útil recurrir a la categoría antropológica de *transacción*, pues posibilita la comprensión de aspectos sustanciales de los procesos de actualización y operatoria concreta y cotidiana de las relaciones de poder. Esta noción, para Mabel Grimberg (2009: 316), se constituye como una categoría descriptiva:

[...] el poder se construye, se mantiene y se transforma a través de procesos económicos, políticos e ideológicos [...] Esa perspectiva del concepto de transacción permite una interpretación de los procesos [...] acentuando tanto la contradicción como los límites y las posibilidades que se abren en los intersticios que dejan las relaciones de poder activamente construidas.

De este modo, es posible pensar en la constitución de campos de transacción en los que se articulan prácticas de coacción, aceptación, reproducción, cuestionamiento, control, sujeción, disputa, movilización, apropiación, demanda- negociación y confrontación- concertación. Ello, articulado con la noción de lugar como entramado específico de racionalidades políticas, resulta un punto de partida conceptual interesante para reflexionar en torno a las experiencias situadas en torno al 2001, en las cuales podemos aprehender tanto prácticas solidarias con el neoliberalismo como, por el contrario, “contraconductas” propiciatorias de formas alternativas de vivir lo político y construir relaciones sociales.

Con este fin, realizaremos un análisis de los testimonios de funcionarios, militantes sociales y universitarios de Villa María y Río Cuarto, en el marco de la Jornada “El 2001 en las miradas locales. Voces, sentidos, experiencias”. En este marco, pudimos observar en primer lugar cómo las y los referentes, en línea con el desarrollo histórico que hiciésemos más arriba, comparten un *diagnóstico* de la situación económica y política de la época: el creciente fenómeno migratorio del campo a las ciudades (Otto Wester), el fuerte incremento de la deuda externa, el proceso de desindustrialización y -en consecuencia- de desocupación (Marisa Cariddi) son algunos de los tópicos centrales.

Ahora bien: también resulta claro en los testimonios de los referentes cómo éstos tienen la certeza de la especificidad de la instanciación local de las lógicas neoliberales. A ello contribuyen, en primer lugar, los fuertes *contrastos* entre sectores sociales, que en el ámbito local tienen la particularidad de ser más visibles y notorios. Asimismo, aparece el reconocimiento de la insuficiente preparación para la gestión pública local -de enorme relevancia dada la complejidad del contexto-, que intentó suplirse con el incremento de la intensidad del trabajo político, aún llevado adelante en condiciones de fuerte precariedad (Otto Wester). No obstante, ello no fue suficiente para eludir la expansión y profundización de cierta *dinámica despolitizante* que los militantes deploran explícitamente: el “Que se vayan todos” como consigna se vuelve muy dificultosa entre vecinas y vecinos, con relaciones interpersonales fuertes y de larga data en un marco de cercanía.

Asimismo, resulta sugestivo en los testimonios de funcionarios y referentes el reconocimiento de la actualidad de los problemas estructurales que se hallaban en la base del estallido social, y que constituyen un *sustrato de condiciones capaz de habilitar la nueva ocurrencia de un acontecimiento semejante*. Por caso, Sebastián Capurro afirma que la situación social, política y económica posterior al gobierno de Cambiemos, junto con el agravamiento de la situación en el contexto post- pandemia -nivel de ingresos, poder adquisitivo, situación del empleo- vuelve urgente tomar medidas de cambio profundo.

En este sentido, el referente mencionado traza una línea histórica que enlaza a las y los integrantes del FREPASO con los actores políticos identificados con el Kirchnerismo y, luego, con el gobierno de Alberto Fernández (Frente de Todos). Desde su punto de vista, esto permite reconocer

la configuración de una clase política que, así como se asume responsable de la superación de la crisis a partir de 2003, *no es inocente de su gesta*: la estructura productiva y distributiva no ha sufrido modificaciones sustanciales desde la última dictadura militar, y los gobiernos “progresistas” sucedidos desde ese entonces deben asumir su responsabilidad ante ese hecho.

Hay que añadir a ello, finalmente, el énfasis por parte de los referentes en dos circunstancias actuales que, asociadas al neoliberalismo, constituyen claros obstáculos para la democracia. En primer lugar, la *realidad socioeconómica* actual: “El número de pobres es incompatible con cualquier democracia” (Juan Carlos Giuliani), lo que nos impele a recuperar viejos -pero irresueltos- debates teóricos e históricos en torno a la igualdad y la libertad como fundamentos democráticos y volver a preguntarnos por los efectos de larga data de la articulación histórica entre retorno a la democracia y neoliberalización de la economía y la sociedad en la década del 80.

En segundo lugar, podemos destacar entre los testimonios la asunción de la persistencia de la *criminalización de la politización*, elemento absolutamente refractario para los procesos de participación y fomento democrático. Si el terrorismo de Estado conllevó el miedo y la parálisis del compromiso con lo común, esto revivió ante la innegable materialidad de 39 militantes asesinados en el estallido -entre los cuales se hallaba David Moreno, de 13 años de edad-. Para varios de los referentes citados, hoy, a pesar de las transformaciones, a partir de los casos de gatillo fácil y persecución policial podemos delinear una historicidad en la cual la represión y criminalización de la participación siguen presentes.

Como dijéramos, sin embargo, es necesario comprender esta especificidad de la instanciación local de las lógicas neoliberales de forma compleja, pudiendo aprehender también la emergencia, en el marco de los sucesos de 2001, de prácticas de resistencia y construcción política en las que podemos reconocer lógicas alternativas. Por caso, Otto Wester reconoce que las administraciones públicas locales constituyeron una suerte de *barreras de contención*, capaces de impedir -al menos parcialmente- que “el incendio se propagase descontroladamente”. Por ejemplo, la intervención ante los potenciales saqueos de comercios por parte de las autoridades locales evitó que éstos se llevaran adelante – y la potencial represión subsiguiente-.

Asimismo, es necesario considerar que desde la perspectiva de los referentes -y esto resulta fundamental si intentamos pensar la política desde una concepción que eluda dualismos poco fértiles como el de reproducción/resistencia, este tipo de paliativos *generaron dinámicas novedosas*: movilización, organización, profundización de lazos comunitarios, nuevas maneras de vinculación entre la administración local y la ciudadanía, etc. En este sentido, cabe destacar la certeza de los integrantes de la administración pública local de que la magnitud de los problemas es o era tal que no podían ser resueltos bajo ningún concepto sólo a nivel local. Sin embargo, la trans-escalaridad de los mismos supone que los gobiernos locales también tienen posibilidades de hacer, en particular, usufructando su especificidad: la confianza y cercanía. En palabras de Otto Wester: “Con un oído en el pueblo y otro donde haga falta para poder solucionar las cosas”.

Respecto de las posibles respuestas o soluciones, aún con las limitaciones mencionadas, aparece entre los referentes la centralidad de configurar una *alianza interclases*, quizás buscando recomponer aquel pacto social que estuvo en la base del modelo económico y político más progresista del siglo XX. Al decir de Juan Carlos Giuliani, el peronismo representó una alianza histórica (la que nosotras llamáramos Alianza Nacional Popular), y su quiebre se encuentra en la base del retorno de los sectores concentrados: las oligarquías. Así, entre las primeras respuestas privilegiadas a la crisis social de la década del '90 aparecieron las articulaciones ciudadanas y organizativas -se destaca el caso de la “Mesa de concertación social”, entre iglesias (católica y evangélica), partidos políticos, representación gremial (CGT), representación de personas desocupadas (Otto); o bien el Frente Nacional contra la Pobreza (FRENAPO), desde el cual se buscó

promover la implementación de medidas -definidas a través de una consulta popular- como el seguro de empleo, AUH e ingreso para mayores sin jubilación ni pensión (Juan Carlos Giuliani).

Ahora bien: es parte del sentido común propio de las interpretaciones en torno a los sucesos de 2001 el reconocimiento de la unidad pobres- sectores medios: “Piquete y cacerola la lucha es una sola”, tal como la recupera Giuliani en su testimonio. No obstante, Guillermo Natalí, al explicitar que entre las primeras medidas de intervención del estado local ante la crisis estuvo la construcción de redes y el fomento a la participación ciudadana, enfatiza que ello se llevó adelante de manera diferencial: entre los sectores más empobrecidos se incrementó la presencia estatal a través de, por caso, un mayor número de “trabajadoras sociales”. Entre los sectores medios y altos, sin embargo, se impulsaron empresas de economía mixta. Emerge, entonces, la pregunta: esta alianza política en el momento de crisis no sólo fue efímera, sino que la diferenciación estructural se vio replicada en las formas de intervención del estado local. Sobre esta base, la distancia material, económica y simbólica no hizo más que crecer en los años subsiguientes.

Quizás la experiencia de articulación inter-clases más interesante que emerge de los testimonios esté dada por la organización Córdoba Desde Abajo- luego Barrios de Pie-en que sectores populares se articularon con sectores medios que contribuyeron a fortalecer la autonomía y organización colectiva, enfatizando en la construcción de poder político en un marco organizacional de base (Marisa Cariddi). Este proceso tuvo, además, la virtud de habilitar la reflexión en torno a la necesidad de considerar la emergencia de un nuevo sujeto histórico que no se reduzca a las organizaciones sindicales, ante lo cual aparece fuertemente el protagonismo de las mujeres como referentes sociales en los ámbitos de organización y lucha, entre los que se destacan en la época las ollas populares y otros espacios organizativos vinculados con la reproducción de la vida y la garantía de la subsistencia (trueque, economía popular).

Finalmente, cabe recordar que la movilización de 2001 no fue espontánea: localmente no había experiencias de lucha en la calle (Otto Wester), al tiempo que la mediación de sindicatos, asambleas, mesa de concertación, estudiantes, cooperativas, medios de comunicación fue fundamental (Sebastián Capurro). Se vuelve necesario emprender nuevamente, entonces, el camino “de la calle al barrio”, para comprender las dinámicas locales, situadas, experienciales, que permiten comprender mejor el estallido que modificó el curso de la historia nacional.

Palabras finales

Como vimos, el modelo de valorización financiera destruyó casi por completo las posibilidades de reconstrucción de una Alianza Nacional Popular, potenciando irrestrictamente las lógicas neoliberales y el poder del capital financiero. Luego de 2001 y a partir de 2003 el Kirchnerismo intentó con escaso éxito recuperarla. A ello siguió, después de más de una década, el triunfo electoral de la Alianza Cambiemos, fiel representante de las lógicas que llevaron al colapso de 2001 y que reseñáramos brevemente, para luego obtener la victoria -nuevamente- una alianza nacional popular moderada, que se enfrentaría a las consecuencias sociales, económicas y políticas de la pandemia con resultados muy pobres en los principales indicadores sociales y graves problemas en el manejo de la economía.

En este contexto, cabe traer a colación a Juan Carlos Giuliani y su reflexión en torno al daño que representa el *posibilismo* para la construcción de un nacionalismo popular y revolucionario. Desde este punto de vista, si no se puede hacer nada más que administrar lo dado, no hay posibilidades de transformación profunda y, por tanto, el hacer política pierde su norte y su sentido. Ésta ha sido y es, a nuestro entender, una de las debilidades más destructivas de los gobiernos progresistas latinoamericanos de principios de siglo en tanto, como afirma Álvaro García Linera, las

tácticas de desestabilización política se vuelven eficaces capitalizando las debilidades de los progresismos, que emergen de la producción de distancias entre las élites de los gobiernos y su sustento popular, o bien cuando las reformas de primera generación muestran sus límites (García Linera, 2022).

A este respecto, el ex vicepresidente de Bolivia reconoce una serie de lecciones aprendidas luego de la dolorosa experiencia del reciente golpe de Estado en su país, que pueden nuclearse en la certeza de que la derecha a la que nos enfrentamos no es la misma que la de inicios de siglo. Así como la derecha postdictatorial de fines de siglo XX fue democrática y liberal, dado el consenso entre libre mercado y democracia electoral al que nos referimos precedentemente, a principios de siglo XXI la segunda se convierte en herramienta para la emergencia de gobiernos progresistas y, por tanto, las derechas viran sus prácticas hacia formas cada vez más autoritarias (García Linera, 2022).

Asimismo, hay que considerar que las reformas que podemos identificar con la “primera oleada progresista” en América Latina son insuficientes ante la crisis ambiental, epidemiológica y económica. En este marco, nos encontramos ante un hecho paradójico: ni el neoliberalismo propone un plan a largo plazo que no sea apenas un regreso violento y melancólico a las huellas del pasado, ni el progresismo presenta un horizonte con capacidad de remontar las dificultades que han emergido de la pandemia y la crisis económica y ambiental. Así se produce hoy un momento de estupor colectivo, que debemos atravesar prontamente (García Linera, 2022).

En efecto: siguiendo a García Linera, hoy la obligación o responsabilidad histórica ineludible es recuperar “para nuestro lado” las banderas de la esperanza. La política es la conducción de las esperanzas colectivas y el Estado, como síntesis jerarquizada de la sociedad, es el monopolio de éstas: debemos ser capaces de impulsar y defender colectivamente reformas progresistas de segunda generación capaces de recuperar el entusiasmo en la lucha por la igualdad, la justicia social y la construcción de una comunidad universal.

Bibliografía

- Brown, W. (2016). *El pueblo sin atributos. La secreta revolución del neoliberalismo*. España: Malpaso Ediciones.
- Basualdo, E. (2000). *Concentración y centralización del capital en la Argentina durante la década de los noventa*. Argentina: FLACSO.
- Basualdo, E. (2002). *Sistema político y modelo de acumulación en la Argentina: Notas sobre el transformismo argentino durante la valorización financiera 1976-2001*. Argentina: FLACSO.
- Duhalde, E. (1999). *El estado terrorista argentino. Quince años después una mirada crítica*. Argentina: Eudeba.
- Estévez Villarino, B. (2011). La idea de espacio público en geografía humana. Hacia una conceptualización (crítica) contemporánea. *Documents d'Anàlisi Geogràfica*, 58 (1), 137-163.
- Foucault, M. (2007). *Nacimiento de la biopolítica: Curso en el Collège de France, 1978-1979*. Argentina: FCE.
- García Linera, Á. (2022). *La política como disputa de las esperanzas*. México: CLACSO
- Grimberg, M. (2009). Poder, políticas y vida cotidiana. Un estudio antropológico sobre protesta y resistencia social en el área metropolitana de Buenos Aires. *Revista de sociología e política*, 17(32), 83-94.
- Grinberg, S. (2007). Gubernamentalidad: estudios y perspectivas. *Revista argentina de sociología*, 5 (8), 97-112.
- Massey, D. (2012). *Un sentido global del lugar*. España: Icaria.
- O'Donnell, G. (1997). *Contrapuntos: ensayos escogidos sobre autoritarismo y democratización*. Argentina: Paidós.

Fuentes citadas

Testimonios expuestos durante la Jornada “El 2001 en las miradas locales. Voces, sentidos, experiencias. 20 años después”, el 25/11/2021, organizada por la Red de Cooperación “Actores sociales y políticos en tiempos de neoliberalismo. Dinámicas y articulación en espacios subnacionales de América del Sur”.

Expositoras/es: Marisa Cariddi (militante de Barrios de Pie); Nuria Rojo (militante universitaria UNVM); Sebastián Capurro (militante territorial y universitario UNVM); Guillermo Natalí (Ex subsecretario de Promoción Social en Municipalidad de Río Cuarto); Otto Westter (Ex secretario de Políticas Sociales en Municipalidad de Villa María); Juan Carlos Giuliani (militante y dirigente de la Central de Trabajadores Argentinos).

Sobre las autoras

María Susana Bonetto

msbonetto@hotmail.com

Dra. en Derecho y Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Villa María.

María Luz Ruffini

ruffiniluz@gmail.com

Dra. en Ciencia Política. CONICET. Centro de Conocimiento, Formación e Investigación en Estudios Sociales (CConFIeS). Universidad Nacional de Villa María.

Capítulo 2: Hacer política local durante la crisis del 2001

Juan Manuel Reynares
María Virginia Tomassini

Resumen

La “crisis del 2001” constituye un proceso central de la historia reciente en nuestro país. La debacle que a nivel nacional dejaba como consecuencia la década neoliberal repercutió también en la provincia de Córdoba. Dentro de las ciencias sociales, existe una tendencia cada vez más fuerte a investigar los procesos políticos actuales desde una mirada local e histórica. Mientras que lo local se relaciona con los fenómenos contemporáneos de territorialización de la vida política argentina, la dimensión histórica apunta a dar cuenta del carácter relativamente estructurado de los escenarios locales, como resultado parcial de la encarnación de discursos, de modo singular y conflictivo, por parte de actores socio-políticos con ciertas trayectorias de identificación.

Desde esta perspectiva, y a partir del análisis de los testimonios de funcionarios, militantes sociales y universitarios de Villa María y Río Cuarto, en el marco de la Jornada “El 2001 en las miradas locales. Voces, sentidos, experiencias”, nos interesa en este artículo explorar cómo estos actores dieron sentido a su accionar político en esos contextos críticos. Particularmente, nos gustaría reflexionar sobre la crisis como situación catalizadora de rearticulaciones sociales, generadora de esquemas de solidaridad entre agencias públicas municipales y organizaciones comunitarias para paliar los efectos más urgentes del declive socio-económico que eclosionó en 2001. En ese marco, y en base a los recuerdos que evocaron las personas durante la Jornada, profundizaremos sobre el proceso de resignificación de lo local, no como terminal aséptica de procesos nacionales, sino como espacio fructífero para la canalización de demandas en el territorio más próximo. Analizaremos así los modos en que la construcción significativa “hacer política local” fue resemantizada en aquella coyuntura difícil, rastreando las narrativas disponibles con las que se articuló desde cada una de las posiciones sociales involucradas.

Palabras clave: crisis social; enfoque subnacional; actores sociopolíticos locales; Villa María; Río Cuarto

Hacer política local durante la crisis del 2001

Juan Manuel Reynares
María Virginia Tomassini

Introducción

La “crisis del 2001” constituye un proceso central de la historia reciente en nuestro país. Luego de años de gobiernos neoliberales, la economía argentina estaba al borde del colapso en el año 2000. La crisis social y política desembocó en fuertes protestas de los ciudadanos. El 19 y 20 de diciembre de 2001 se produjo la movilización popular denominada “cacerolazo” bajo el grito de “que se vayan todos y que no quede ni uno solo”. En este contexto, el ministro de Economía, Domingo Cavallo, presentó su renuncia y el presidente de la Nación, Fernando de la Rúa, declaró el estado de sitio por los saqueos ocurridos en varios lugares del país. Ante el reclamo popular, finalmente presentó su renuncia retirándose de la Casa Rosada en un helicóptero.

La debacle que a nivel nacional dejaba como consecuencia la década neoliberal repercutió también en la provincia de Córdoba. Dentro de las ciencias sociales, existe una tendencia cada vez más fuerte a investigar los procesos políticos actuales desde una mirada local e histórica. Mientras que lo local se relaciona con los fenómenos contemporáneos de territorialización de la vida política argentina, la dimensión histórica apunta a dar cuenta del carácter relativamente estructurado de los escenarios locales, como resultado parcial de la encarnación de discursos, de modo singular y conflictivo, por parte de actores socio-políticos con ciertas trayectorias de identificación.

Desde esta perspectiva, y a partir del análisis de los testimonios de funcionarios, militantes sociales y universitarios de Villa María y Río Cuarto, en el marco de la Jornada “El 2001 en las miradas locales. Voces, sentidos, experiencias”, nos interesa en este artículo explorar cómo estos actores dieron sentido a su accionar político en esos contextos críticos. Particularmente, nos gustaría reflexionar sobre la crisis como situación catalizadora de rearticulaciones sociales, generadora de esquemas de solidaridad entre agencias públicas municipales y organizaciones comunitarias para paliar los efectos más urgentes del declive socio-económico que eclosionó en 2001. En ese marco, y en base a los recuerdos que evocaron las personas durante la Jornada, profundizaremos sobre el proceso de resignificación de lo local, no como terminal aséptica de procesos nacionales, sino como espacio fructífero para la canalización de demandas en el territorio más próximo. Analizaremos así los modos en que la construcción significativa “hacer política local” fue resemantizada en aquella coyuntura difícil, rastreando las narrativas disponibles con las que se articuló desde cada una de las posiciones sociales involucradas. Inscribiéndonos dentro del horizonte onto-epistémico de la Teoría Política del Discurso (Laclau y Mouffe, 2004; Glynos y Howarth, 2007), prestaremos atención a las dinámicas simbólicas mediante las cuales la práctica política local se cargó de sentido en una instancia de dislocación extrema del orden social vigente. Realizaremos el análisis sobre los relatos ya mencionados, distinguiendo a las significaciones presentadas por los funcionarios de las áreas de acción social de cada municipio, por un lado, y por los y las militantes territoriales, sindicales y

universitarias, por el otro. A su vez, consideraremos los efectos de la crisis evocados por estos actores y los modos en que incidió en su práctica política posterior.

La hipótesis general que guía este acercamiento considera que la “política local” como significativa fue resemantizada en coyunturas críticas, articulada a una narrativa de empoderamiento de organizaciones sociales y a la consolidación de las áreas de Acción Social de los municipios en cuestión. Quizás como un efecto inesperado de la crisis, y mucho más que las pretensiones modernizadoras de los proyectos descentralizadores llevados adelante durante los noventa, con los sucesos del 2001 lo local se reforzó como un espacio para *hacer política*.

El 2001 en la provincia de Córdoba¹

A fines del año 2001 el gobierno del presidente de la Rúa terminaba abruptamente con su renuncia y la de su gabinete, tras varios días de manifestaciones callejeras que incluyeron la declaración del toque de queda y cuya represión dejó como saldo numerosos muertos y heridos. Diciembre de 2001 fue parte de un ciclo de protesta más amplio, gestado desde la segunda mitad de los noventa, y que se caracterizó por una multiplicidad de demandas contra la dirigencia política que se condensó en la consigna, ampliamente enunciada en las protestas de diciembre de 2001, “que se vayan todos”.

Es posible mencionar algunas características de este fenómeno a partir de lo sucedido en la provincia de Córdoba en el período. Las transformaciones estructurales implementadas por la administración de Menem que impactó profundamente en la provincia a partir de la descentralización de áreas centrales como educación y salud fueron resistidas tanto por sindicatos perjudicados por estas medidas, como por nuevas organizaciones sociales compuestas por vecinos autoconvocados y por desocupados (Gordillo et al., 2012). Ya durante la crisis financiera del gobierno de Angeloz, en 1995, hubo grandes movilizaciones sindicales, especialmente de docentes y empleados públicos provinciales. También se registraron amplias expresiones de rechazo y movilización frente a las medidas de ajuste del gasto público implementadas por la recién asumida gestión de Ramón B. Mestre, en la segunda mitad de 1995 (Closa, 2010: 479).

A su vez, la desocupación, la pauperización y marginalización de amplios sectores de la población fueron condiciones de posibilidad para la emergencia y consolidación de actores sociales con nuevos formatos de organización y acción, como también con nuevas demandas de trabajo, alimentos y condiciones de vida dignas. Ya desde mediados de esa década estas organizaciones sociales de piqueteros, trabajadores desocupados y vecinos con fuerte anclaje territorial discutían el carácter excluyente de las políticas económicas implementadas tanto por el Estado nacional como el provincial (Closa, 2010: 490-491; Franco y Medina, 2012; Natalucci, 2008).

Además del incremento de la acción colectiva de protesta, se evidenció un aumento de la desafección electoral, en lo que se conoció como “voto bronca” (Pousadela, 2004; Herrero, 2011). Esta forma de resistencia, tanto particular como organizada, se expresó en Córdoba en dos elecciones específicas durante 2001: en julio, el plebiscito para convocar a una Reforma de la Constitución de la Provincia de Córdoba que permitiese la reducción de las dos Cámaras de Diputados y Senadores provinciales en una Unicameral; y en septiembre, los comicios para la Convención Constituyente. Allí se registró un fuerte incremento de votos nulos y blancos, como así también una baja asistencia electoral, que se repitieron con mayor importancia en las elecciones legislativas de octubre (Gordillo, 2011).

¹ Para el desarrollo de este apartado partimos de lo expuesto en Reynares, 2018.

Así, la marcada desafección electoral y la confluencia de la movilización de organizaciones piqueteras con medidas de acción directa como los “cacerolazos” y escraches frente a casas de funcionarios, gobernantes o incluso sus familiares configuraron la coyuntura crítica que eclosionó en diciembre de 2001. Los estudios sobre este ciclo de protestas apuntan en general que implicó una variedad de efectos políticos en la Argentina. Además de los ya citados sobre el caso específicamente cordobés, existe una enorme variedad de literatura especializada que se interrogó desde diversos enfoques analíticos por el ciclo de protesta de fines de los noventa y comienzos de 2000 y sus efectos sociopolíticos (Bonnet, 2008; Cheresky y Blanquer, 2004; Muñoz, 2010; Novaro, 2003; Quiroga, 2005; Schuster et al., 2005; Svampa y Pereyra, 2003).

En este marco de heterogéneas referencias bibliográficas, nos interesa en lo que sigue indagar sobre la imputación de sentido en torno a un sintagma particular, el de *hacer política local*, en el nivel local a partir de las memorias de funcionarios municipales y militantes sociales y universitarios. Consideramos que allí se ponen en juego estos rasgos ya estudiados en las instancias nacional y provincial del período crítico de 2001, encarnados en trayectorias identitarias puntuales.

Hacer política desde la perspectiva de los agentes gubernamentales.

Ya durante 2001, el deterioro de la calidad de vida y la problemática del desempleo, producidas por las políticas neoliberales del gobierno nacional, comenzaron a canalizarse a través de los gobiernos locales. Esto representó un desafío a los municipios, ya que no estaban capacitados para resolver este tipo de situaciones, encarnando roles que hasta ese momento ocupaban mayormente el Estado Nacional o Provincial. Como planteaba uno de los expositores en la Jornada, “Nosotros nos habíamos preparado mucho para poder ser el gobierno de Villa María... [pero] Toda nuestra preparación era insuficiente respecto de cómo el contexto había ido deteriorándose en el año 2000, 2001...” (Otto Westter, ex secretario de Políticas Sociales en Municipalidad de Villa María).

La magnitud de la crisis supuso la distorsión en la distribución considerada “normal” de funciones en la gestión pública entre los diversos niveles jurisdiccionales. Ello impactaba en los propios funcionarios, empujados por las circunstancias a desplegar habilidades y conocimientos que no estaban comprendidos en una administración municipal en tiempos de estabilidad económica y social. El período crítico de 2001 dislocó una lógica social que disponía ciertas responsabilidades entre posiciones específicas del Estado, habilitando así desplazamientos y relaciones relativamente novedosas entre esos elementos y sus funciones.

Ello se observó en un cambio en las estrategias de abordaje de las problemáticas sociales que proliferaban en el entorno más cercano. Allí, el *hacer política* estuvo vinculado entonces principalmente a la contención social, apoyándose en tramas vinculares en el propio espacio municipal, entre vecinos, organizaciones sociales, comerciantes o empresarios. En este sentido las carteras relativas a la Acción Social, o bien al Desarrollo Social, adquirieron especial relevancia en el proceso previo y durante la explosión del conflicto, adquiriendo herramientas que, con improntas diferentes, se enfocaron en la construcción de redes para contener el estallido social a nivel local. En el caso de Villa María se conformó la Mesa de Concertación Social:

En agosto de 2001 en el marco de la semana de Solidaridad se decidió convocar a los distintos actores de Villa María, se conformó una mesa de concertación social para motivar en ese conjunto político a todos los actores políticos que tenían representación en el Concejo Deliberante y también a los que no la tenían, invitamos al arco de la representación gremial, y también autoconvocados que era una novedad en términos de organización social y que eran personas desocupadas que habían perdido en ese contexto y también convocamos a las iglesias para que todos los sectores nos ayudaran a formar una barrera de contención ante la crisis (...)

Si la crisis no la enfrentamos como conjunto, esa crisis nos iba a llevar puesta toda la ciudad (...) se realizaban reuniones entre el conjunto de los actores (Otto Westter, ex secretario de Políticas Sociales en Municipalidad de Villa María).

En Río Cuarto también se impulsó la conformación de redes de cooperación:

como medidas nos propusimos la creación de Redes (...) a partir de garantizar la presencia del estado municipal en el barrio (...) como Secretario de Promoción en no menos de un mes logré convocar un concurso y contratar 17 asistentes sociales lo que permitió la cercanía del estado municipal (...) en desarrollo económico se decidió concretar empresas de economía mixta, como el ejemplo de una empresa de recolección de residuos (...) la articulación con sectores altos para aportes de fondos para alimentos también fue muy importante (...) en la Universidad también había una importantísima red (Guillermo Natalí, ex subsecretario de Promoción Social en Municipalidad de Río Cuarto).

El desempleo y el empobrecimiento de vastos sectores de la población generaban la dislocación de la vida cotidiana. Al no poder satisfacerse cuestiones básicas como la alimentación o la vivienda, los Estados municipales se hicieron cargo, junto con otros actores sociales, de la organización de redes colaborativas. En todos estos casos, la urgencia de los procesos sociales marcó la velocidad y la amplitud de las iniciativas: debían reforzarse áreas gubernamentales con rapidez, así como era necesario convocar a todos los actores relevantes, sin distinción de color partidario. Hacer política suponía así consolidar el aparato estatal y activar su rol de coordinación social, sin mayor planificación sino más bien empujados por una coyuntura de emergencia. En ese sentido, quienes cumplían como funcionarios recordaban la relevancia de reforzar la capacidad estatal para contar con información certera sobre el tamaño de la problemática social. La generación de datos socio económicos que permitieran diseñar diagnósticos para la generación de políticas públicas también fue una decisión de los gobiernos locales mencionados. En ellos se pudieron divisar no solo la situación de vulnerabilidad en la que se hallaban inmersos los sectores populares sino la inequidad en la distribución de los ingresos:

Se realizaron mediciones de indicadores NBI [Necesidades Básicas Insatisfechas] en cada barrio de la ciudad de Villa María. Esto se contrastó con el nivel de depósitos bancarios de otros sectores socioeconómicos, se visualizó la brecha (Otto Westter, ex secretario de Políticas Sociales en Municipalidad de Villa María).

En el caso de Río Cuarto la primera medida que se toma es la realización de un censo, puerta-puerta para toda la ciudad, herramienta fundamental para afrontar la crisis (Guillermo Natalí, ex subsecretario de Promoción Social en Municipalidad de Río Cuarto).

Hacer política, en este sentido, se relacionaba con la construcción de un aparato estatal más eficiente. Contar con información fidedigna sobre los alcances de la crisis en la población para entonces intervenir en la contención social, según algún criterio a pesar de lo urgente de la situación. La convocatoria a descentralizar la acción del Estado fue un nervio de los esfuerzos descentralizadores promovidos por las reformas estatales desde mediados de la década de los 80. No obstante, según los testimonios de los agentes gubernamentales locales, el estallido de 2001 funcionó como un catalizador para la consolidación del aparato estatal municipal en múltiples dimensiones, no como parte de una planificación de larga data, sino como respuesta inmediata ante la crisis.

También se consolidó la capacidad de gestión estatal a nivel local en las relaciones con el Estado provincial. En ese contexto los municipios de Río Cuarto y Villa María ejercieron peticiones al gobierno provincial para generar herramientas de corto plazo y así dar respuesta a la crisis. Allí, por ejemplo, adquirió importancia el Plan "Jefas y Jefes de Hogar" como paliativo al crecimiento del desempleo:

Plan Jefas y jefes de hogar (...) en términos de la ciudad de Villa María fue la forma que a nivel local tuvimos para apagar el incendio, porque ciertamente la sociedad estaba muy mal y fue la

forma que tuvimos para dar respuesta en términos de trabajo, en términos de alimentación, en términos de la vivienda, de algún modo fue un paliativo (...) En el área de Acción Social se trabajó a partir de allí como nunca se había trabajado, arrancábamos a las 8 de la mañana para dar respuesta a la demanda, terminábamos de inscribir a las 21 hs. y los viernes nos íbamos a Córdoba al Ministerio de Desarrollo social a llevar los listados (Otto Westter, ex secretario de Políticas Sociales en Municipalidad de Villa María).

Una vez más, la urgencia -por lo básico de las necesidades y lo acelerado de su empeoramiento- daba sentido a *hacer política* en el territorio local, respondiendo a las demandas más básicas. Ello sólo funcionaba como un elemento transitorio, pero consolidaba al mismo tiempo la capacidad de gestión de los municipios.

Los medios de comunicación generaban un efecto contagio de las concentraciones y reclamos que sucedían en Buenos Aires (Gordillo, 2011). Ello provocó que tanto en Villa María como Río Cuarto el descontento popular generara multitudinarias manifestaciones e intentos de saqueos a supermercados que los gobiernos locales debieron contener. En el caso de Villa María hubo un intento de saqueo a un supermercado. Allí, el gobierno municipal actuó de intermediario entre la empresa, la policía y los vecinos para evitar el enfrentamiento y acordar una estrategia de contención a las necesidades alimentarias, arreglando el abastecimiento con fondos municipales. Por su parte, en Río Cuarto la movilización más grande se dio con el anuncio del “Corralito”, generando incluso protestas en el poder legislativo local:

Hubo marchas importantes con el corralito donde incluso los otros partidos ayudaron a contener (...) en Río cuarto también hubo marchas con miles de personas, incluso entraron al Concejo Deliberante, se vivieron situaciones de violencia que amainaron con la renuncia del presidente de la Rúa (Guillermo Natalí, ex subsecretario de Promoción Social en Municipalidad de Río Cuarto).

Esto reflejaba la crisis política que atravesaba el país. El reclamo de renovación política, concentrado en la frase “Que se vayan todos”, calaba profundo también en los ámbitos locales. No obstante, a partir de lo relevado en los testimonios de los funcionarios, es posible conjeturar que, entre otros factores, fueron precisamente las estrategias de contención y de proximidad por parte de los Estados municipales los que re-legitimaron a los gobiernos locales, que lograron sobrevivir y posicionarse tras la crisis.

Las redes generadas y el nuevo rol de gestión pública de los Gobiernos locales fueron muy relevantes para contener la mayor crisis social y política argentina desde el retorno de la democracia en los espacios subnacionales. Se generaron allí herramientas de gestión pública participativa que incluso persisten en sus diferentes modalidades en las dos ciudades que exploramos aquí, como el Consejo Económico Social, o las iniciativas de presupuesto participativo, entre otras. Hacer política en el territorio supuso la consolidación -en un contexto de urgencia, transitoriedad y necesidad- de los aparatos estatales locales. Ello implicó que se estrecharan lazos entre estos Estados y otros actores sociales, conformando nuevos sujetos políticos que sobrevivieron a la crisis de 2001, a pesar de su profundidad y su impacto en la representatividad institucional. Al impulsar medidas de contención y coordinación, se abrieron oportunidades para nuevas formas institucionales de “hacer política” que trascendieron la mera respuesta administrativa a demandas sociales.

Hacer política según los militantes

Como hemos visto, la dislocación extendida de la realidad social en 2001 tuvo múltiples incidencias en los aparatos estatales a nivel local. Supuso una reorganización de sus áreas, impulsando las funciones de coordinación y contención, sumando relevancia a aquellas instancias

de gobierno que usualmente eran consideradas como meras terminales asépticas para la distribución de recursos. Lejos de ello, en la promoción de instancias colectivas para la resolución de problemáticas sociales, los municipios fueron actores centrales para la constitución de nuevos espacios políticos. Hacer política implicaba, allí, la posibilidad de nuevos sujetos en la disputa por la distribución de recursos muy escasos.

En un sentido análogo, la crisis habilitó articulaciones entre posiciones sociales a priori alejadas, como el movimiento estudiantil y las organizaciones de desempleados y piqueteros (Gordillo, 2010; Natalucci, 2008; Muñoz, 2010). En ese sentido, los meses críticos de 2001 son recordados por quienes militaban en las universidades y en organizaciones sociales como una época de urgencia y descontento, pero también como un tiempo de fervor y de movilización. Específicamente la militancia universitaria protagonizó la movilización contra la pretensión del gobierno nacional de arancelamiento de la educación pública superior y, más en general, del recorte de su presupuesto. En dicho contexto, el movimiento estudiantil se solidarizó y militó activamente junto al movimiento obrero:

Como universitarios en plena lucha, se empezaba a gestar el 'que se vayan todos' (...) los obreros cobrando papelitos de colores [bonos Lecop] todo esto gestó las cacerolas, a través de los medios se iba calentando la atmósfera de la sociedad... Era todo un movimiento en la Universidad colaborar en las comisiones de becas de trabajo o de ayuda económica, de golpe el anuncio de recorte Universitario (...) los estudiantes nos unimos, tomamos la Universidad, para luchar y que el recorte no se diera (Nuria Rojo, militante universitaria UNVM).

Como ya ha sido ampliamente discutido al interior de la Teoría Política del Discurso, una crisis implica evidenciar el carácter constitutivamente dislocado de la trama social. El estatuto primario de la dislocación señala la existencia de una falla a la base de la sociedad, que impide la absoluta identidad de ésta consigo misma (Marchart, 2008). Desde esta perspectiva, una crisis no puede ser una ruptura externa de un orden establecido, sino que, por el contrario, el carácter fallado de lo social es la base sobre la que disputan de modo contingente, pero en el trasfondo de una relativa y desnivelada estructuralidad, diversas cadenas significantes para suturar el sentido de lo social. Ahora bien, la dislocación posee un carácter cuasi estructural que se evidencia de manera más explícita, aunque no es la única posible, a través de irrupciones ónticas como la crisis orgánica que en 2001 catalizó diversas rupturas de la trama social argentina. En el caso bajo análisis aquí, las dificultades financieras que se expresaban en las cuasimonedas que los diversos gobiernos hicieron circular en la época y la denuncia a los representantes políticos fueron elementos que dejaban traslucir la disolución de las lógicas simbólicas más básicas en la sociedad argentina.

Ahora bien, es importante remarcar que una crisis no tiene sentido literal a priori, sino que su propia interpretación colectiva como tal depende de la disputa entre discursos. Estos dan sentido a una situación como crítica al incluirla en una cadena significativa, donde el elemento diferencial de la crisis se vuelve equivalente al resto del conjunto en referencia al punto nodal de ese discurso, que pasa a funcionar como una metáfora de la plenitud de lo social. Así, la crisis se imputa de sentido como tal por la sobredeterminación de su significado por parte de ese significativo nodal, excluyendo a un antagonismo que representa aquello que impide tal completamiento. Esa disputa por la interpretación de la crisis se produce en un marco relativamente estructurado por prácticas sedimentadas y tradiciones discursivas. En esos momentos es que se evidencia con mayor claridad el carácter dislocado de lo social, y donde pueden observarse cuáles son los relatos que pretenden dar sentido tanto a la sociedad en su conjunto como a la ruptura de ese orden.

En ese contexto, el intento de recorte del presupuesto en educación coaguló aquellas condiciones e impulsó la movilización estudiantil y social en una articulación popular. En este punto, otro aspecto del *hacer política local* emerge: la constitución de un sujeto político, aunque provisorio y fragmentario, que demandaba una nueva distribución de recursos, al mismo tiempo que

denunciaba a un régimen socio-económico injusto, el régimen neoliberal impuesto a nivel nacional pero ratificado también en la provincia. Así, un militante estudiantil en Villa María construía su memoria de lo ocurrido:

Yo recuerdo todo como una jornada trágica, ver a los policías con las itacas y ver enfrente gente con hambre era una postal muy triste (...) el 20 diciembre no fue un hecho espontáneo, el pami estaba fundido, las colas en los bancos, los médicos no cobraban, la gente iba a las salitas (...) todos los movimientos en la Mesa de Concertación Social, en la Universidad que estábamos discutiendo sobre la reforma de la educación y que eso nos movilizaba a todos como estudiantes, acompañamos al movimiento obrero... (Sebastián Capurro, militante territorial y universitario UNVM).

La tarea de militancia territorial de las organizaciones estudiantiles, articuladas con organizaciones territoriales, se concentró en la asistencia alimentaria y la contención social en los barrios vulnerables de las ciudades. Del mismo modo que lo analizado en relación a las agencias gubernamentales municipales, en estas instancias no sólo se ponía en juego una satisfacción inmediata de una necesidad social concreta, sino que también se disponía una articulación política con efectos en la interpretación de las actividades de los mismos sujetos. Estos imputaban de sentido a su accionar como un modo de hacer política que podía abrir el debate sobre el ordenamiento legítimo de la sociedad:

las ollas solidarias se convirtieron en un principio de movimientos de lucha (Marisa Cariddi, militante de Barrios de Pie).

A nivel de las organizaciones sociales fue un salto de calidad en el territorio... A partir de 2001 se constituye Barrios de Pie como organización, como movimiento social, que se rodea de sectores medios que contribuyen a la organización, a la autonomía de los sectores populares, a construir autonomía, a construir poder político. Y esto de empoderar a las compañeras que estaban al frente de las ollas para conducir este movimiento... (Marisa Cariddi, militante de Barrios de Pie).

La articulación de diversas demandas durante el período crítico de 2001, más allá de distinciones de clase, tuvo efectos políticos al establecer las condiciones para nuevos sujetos, planteados en términos de "autonomía" y "poder", que disputaron los repartos legítimos de prerrogativas sociales. Al recordar aquellos días como instancias de "empoderamiento" de mujeres en la conducción de organizaciones sociales, el efecto político de la crisis ha reverberado en una ampliación del escenario político bajo otras claves identitarias como las reivindicaciones sexo-genéricas, muy relevantes en años posteriores.

La discusión política más allá de la mera administración de recursos en el territorio y entre la población que lo requería puede observarse con claridad en un testimonio que recuerda un hecho traumático, la muerte por accidente de un compañero de militancia, Gabriel Chalita, durante las tareas de reparto de comida en condiciones bastante precarias:

El día 20 habíamos estado descargando bolsones de mercadería para contener las amenazas de saqueo (...) nos trasladamos a los galpones con 10, 12 compañeros de la Juventud Peronista y esa noche el compañero Chalita nos dejó en plena tarea de militancia (...) esa noche Gabriel quedó electrocutado en la grúa [con] que íbamos subiendo la mercadería, fue un golpe durísimo, algunos compañeros seguimos *trabajando en política, fue una víctima más de los procesos neoliberales* (Sebastián Capurro. *Cursivas agregadas*).

La articulación política producida al calor de la crisis, en tanto la dislocación conmovía las coordenadas más básicas de la vida colectiva en lo referido a la alimentación, la vivienda y el empleo, fue el escenario de una crítica frontal al neoliberalismo. Éste emergió como un nombre para delimitar un conjunto de medidas económicas, y más en general toda una época, con la cual enfrentar antagónicamente un proyecto de articulación popular novedoso, aunque inexistente en

aquel momento, a finales del 2001: “En el territorio hubo una convergencia de las trayectorias históricas (...) el emergente comienza en la dictadura militar con la nacionalización de la deuda privada... y las sucesivas políticas...” (Marisa Cariddi, militante de Barrios de Pie)).

Estableciendo el comienzo en la dictadura cívico-militar de 1976, esta militante sindical explicitaba que había sido en la actividad política territorial donde confluyeron diversas organizaciones con sus trayectorias y aprendizajes. De este modo, *hacer política local* suponía además la construcción de una narrativa tramada simbólicamente por fuera de los márgenes del debate público institucionalizado.² Este discurso se construyó paulatinamente en sucesivas experiencias organizativas de los sectores populares, a partir de lucha sostenida contra las medidas de reforma y liberalización económica impuestas intermitentemente desde mediados de los 70, y acompañadas con una represión sistemática de las organizaciones:

Criminalización de la pobreza, gatillo fácil, lo sucedido en los días 19 y 20 de diciembre con la declaración del estado de sitio es volver a la simiente de lo que significó el terrorismo de Estado: infundir el miedo en un contexto que se venía cocinando ollas populares, la toma de fábricas (Juan Carlos Giuliani, militante y dirigente de la Central de Trabajadores Argentinos).

El hacer política local, más allá de las instituciones tradicionales, activó durante la crisis de 2001 un cúmulo de solidaridades relativamente estructuradas, de saberes urgidos por la necesidad, cuya potencia no se agotó en la resolución de casos concretos. Por el contrario, aquella experiencia persistió, luego de ese año, mediante la constitución de sujetos políticos que, a su vez, desplegaron una memoria sobre lo ocurrido, interpretando las causas de la debacle en procesos de largo plazo en la historia argentina. Tal rasgo estructural de los conflictos acompaña las luchas políticas actuales, volviéndolas cada vez más relevantes.

Algunas notas para concluir

La crisis de 2001, a partir de testimonios de funcionarios municipales y militantes universitarios y territoriales, se vuelve una instancia histórica fecunda para el análisis de ciertos desplazamientos en la trama simbólica de nuestra cronología política reciente. Como ya hemos visto, la crisis ha sido explorada y analizada desde múltiples dimensiones. De allí que nuestro aporte, específico y situado, ha pretendido dialogar con esa nutrida bibliografía dando cuenta de los significados que adquirió, en las rememoraciones de aquellos aciagos y enfervorizados días, el sintagma “hacer política local”.

Desde las posiciones de los funcionarios locales, hacer política fue consolidar el aparato estatal en lo relativo a la acción social, pero también en su rol de coordinación de las organizaciones sociales, en su comunicación con el Estado provincial y en la producción de información sobre problemáticas poblacionales. De este modo, el reforzamiento del Estado apuntalaba su capacidad para articular demandas sociales, no sólo satisfaciendo la necesidad insatisfecha, sino también dotando de sentido a la coyuntura crítica. La presencia del Estado municipal se recostó sobre un conjunto de solidaridades previas, que históricamente han configurado el espacio local de ciudades intermedias como Río Cuarto y Villa María.

Al apoyarse en esa sedimentación social, e impulsado por la urgencia de la crisis, habilitó nuevas rearticulaciones políticas y experiencias de organización que trascendieron “el 2001”. Esos saberes específicos, en la relación con otros niveles estatales, en la coordinación de instancias, en

² Como bien señala, entre otros, Muñoz (2010), es el principio de lectura de denuncia al neoliberalismo menemista que enarbolan los movimientos de desocupados y piqueteros el que luego consolidará el presidente Néstor Kirchner desde el Estado nacional.

la producción de información sobre las poblaciones bajo su administración, dan cuenta de lógicas territoriales efectivas y, sobre todo, alternativas a la propuesta de descentralización administrativa impulsada por organismos transnacionales de crédito durante toda la década del '90. Como supo sintetizar uno de los expositores:

Los gobiernos locales tenemos posibilidades, aun cuando parece que la respuesta tiene que venir ordenada y digitada y resuelta en temas tan estructurales desde algún otro lado, también los gobiernos locales, contribuyendo con la organización y contribuyendo con la cercanía con los vecinos... les puedo decir que, no sin discusiones y situaciones muy difíciles, logramos sobrellevar la crisis... (Otto Westter, ex secretario de Políticas Sociales en Municipalidad de Villa María).

De un modo complementario, desde la mirada de activistas en las universidades y en el territorio, hacer política se conjugó en la articulación de demandas bajo un común denominador popular frente al neoliberalismo como régimen injusto y excluyente. Y también en la conformación de una narrativa política que señalaba responsables de la miseria extendida, así como un camino a recorrer para superar aquellos trances. Además, relacionaba una reconstrucción de la historia política argentina de los últimos cincuenta años con una militancia dotada de un saber hacer, precisamente de un *saber hacer política*, que trascendía la mera administración de recursos para paliar necesidades básicas y podía intervenir en la constitución de sujetos políticos.

Tanto desde la institucionalidad estatal como desde sus márgenes, frente a (y durante) la crisis de 2001, los actores sociales y políticos encarnaron significativamente nuevos modos de hacer política local. Como hemos podido ver, al hacerlo conjugaron dos dimensiones constitutivas de la política. Por un lado, aquella dimensión organizativa, instituida, de la distribución de prerrogativas, tanto en recursos como en palabras legítimas, en un marco social jaqueado por numerosas dislocaciones parciales. Por el otro, aquella dimensión performativa, instituyente, que habilitó la regeneración de nuevos sujetos políticos sobre las tradiciones ya existentes de movilización popular en nuestro país. En este último caso, se fue configurando allí un principio de intelección sobre la crisis que la hacía hundir sus raíces en las épocas más aciagas de la primera instauración de medidas económicas neoliberales en la Argentina durante la última dictadura cívico - militar. Frente a ese neoliberalismo represivo y antidemocrático se volvía necesario consolidar las bases de un sujeto político al interior de un campo nacional y popular en ciernes.

Bibliografía

- Bonnet, A. (2008). *La hegemonía menemista. El neoconservadurismo en la Argentina 1989-2001*. Argentina: Prometeo.
- Cheresky, I. y Blanquer, J. M. (2004). *¿Qué cambió en la política argentina? Elecciones, instituciones y ciudadanía en perspectiva comparada*. Argentina: Homo Sapiens.
- Closa, G. (2010). La recuperación de la democracia y los gobiernos radicales. Angeloz y Mestre (1983-1999). En: C. Tcach (coord.), *Córdoba Bicentenario. Claves de su historia contemporánea (pp. 463-492)*. Argentina: Centro de Estudios Avanzados.
- Franco, M. J. y Medina, L. (2012). Villeros, vecinos y desocupados en el escenario de protestas en Córdoba (1989-2003). En: M. Gordillo (et al), *La protesta frente a las reformas neoliberales en la Córdoba de fin de siglo (pp. 257-306)*. Argentina: Ferreyra Editor.
- Gordillo, M. (2010). *Piquetes y cacerolas... el "argentino del 2001"*. Argentina: Sudamericana.
- Gordillo, M. (2011). Las temporalidades del 2001. *Revista Estudios*, 26, 25-41.
- Gordillo, M., Arriaga, A., Franco, M., Medina, I., Natalucci, A. y Solis, A. (2012). *La protesta frente a las reformas neoliberales en la Córdoba de fin de siglo*. Argentina: Ferreyra Editor.
- Herrero, F. (2011). ¿Pasividad desesperada o protesta astuta? ¿Desperdicio o mensaje a la clase política? Intervenciones sobre cómo pensar el «votobronca» en el momento previo a las elecciones nacionales de 2001. *Revista Estudios*, 26, 43-58.
- Laclau, E. y Mouffe, C. (2004 [1987]). *Hegemonía y Estrategia Socialista. Hacia una radicalización de la democracia*. Argentina: Fondo de Cultura Económica.
- Marchart, O. (2008). *El pensamiento político posfundacional. La diferencia política en Nancy, Lefort, Badiou y Laclau*. Argentina: Fondo de Cultura Económica.
- Mocca, E. (2004). Los partidos políticos: entre el derrumbe y la oportunidad. En: I. Cheresky J-M. Blanquer (comps.), *¿Qué cambió en la política argentina? Elecciones, instituciones y ciudadanía en perspectiva comparada (pp. 83-106)*. Argentina: Homo Sapiens.
- Muñoz, M. A. (2010). *Sísifo en Argentina. Orden, conflicto y sujetos políticos*. Argentina: Eduvim.
- Natalucci, A. (2008). Movilización, acción territorial y nuevas gramáticas de la política: Las huellas de la experiencia piquetera. El caso de Córdoba, 1994-2003. V Jornadas de Sociología de la UNLP, La Plata. En: *Memoria Académica*. Recuperado de: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.6276/ev.6276.pdf
- Novaro, M. (2003). Continuidades y discontinuidades tras el derrumbe político. *Revista SAAP*, 1 (2), 341-376.
- Pousadela, I. (2004). Los partidos políticos han muerto. ¡Larga vida a los partidos! En: I. Cheresky J-M. Blanquer (comps.), *¿Qué cambió en la política argentina? Elecciones, instituciones y ciudadanía en perspectiva comparada (pp. 109-146)*. Argentina: Homo Sapiens.
- Quiroga, H. (2005). La reconstrucción de la democracia argentina. En: J. Suriano (comp.), *Nueva Historia Argentina. Dictadura y Democracia (1976-2001). Tomo X, (pp. 87-155)*. Argentina: Sudamericana.
- Reynares, J.M. (2018). La continuidad ante la crisis. La trayectoria identitaria del peronismo cordobés y los acontecimientos de 2001 en la Argentina. *Revista Studia Politicae*, 45, 155-180.
- Rinesi, E., Nardacchione, G. y Vommaro, G. (2007). *Los lentos de Víctor Hugo. Transformaciones políticas y desafíos recientes en la Argentina reciente*. Argentina: Prometeo
- Schuster, F., Naishtat, F., Nardacchione, G. y Pereyra, S. (comps.).(2005). *Tomar la palabra. Estudios sobre protesta social y acción colectiva en la Argentina contemporánea*. Argentina: Prometeo.

Svampa, M. y Pereyra, S. (2003). *Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras*. Argentina: Biblos.

Fuentes citadas

Testimonios expuestos durante la Jornada “El 2001 en las miradas locales. Voces, sentidos, experiencias. 20 años después”, el 25/11/2021, organizada por la Red de Cooperación “Actores sociales y políticos en tiempos de neoliberalismo. Dinámicas y articulación en espacios subnacionales de América del Sur”.

Expositoras/es: Marisa Cariddi (militante de Barrios de Pie); Nuria Rojo (militante universitaria UNVM); Sebastián Capurro (militante territorial y universitario UNVM); Guillermo Natalí (Ex subsecretario de Promoción Social en Municipalidad de Río Cuarto); Otto Westter (Ex secretario de Políticas Sociales en Municipalidad de Villa María); Juan Carlos Giuliani (militante y dirigente de la Central de Trabajadores Argentinos).

Sobre los autores

Juan Manuel Reynares

juanmreynares@gmail.com

Dr. en Ciencia Política. CONICET. Centro de Conocimiento, Formación e Investigación en Estudios Sociales (CConFIInES). Universidad Nacional de Villa María

María Virginia Tomassini

virginiatomassini2014@gmail.com

Dra. en Ciencia Política. CONICET. Centro de Conocimiento, Formación e Investigación en Estudios Sociales (CConFIInES). Universidad Nacional de Villa María

Capítulo 3: La protesta social y sus colectivos protagonistas en Río Cuarto y Villa María (diciembre 2001-febrero 2002)

María Virginia Quiroga
Celia Basconzuelo
Iván Baggini

Resumen

La crisis del 2001 ha trascendido, principalmente, por el ciclo álgido de protestas entre diciembre de ese año y febrero del 2002, las cuales marcaron la salida del gobierno nacional de Fernando de la Rúa (1999-2001) y evidenciaron las dificultades para construir una nueva hegemonía política. El presente capítulo, como parte de los avances e intercambios en el marco de la Red de cooperación “Actores sociales y políticos en tiempos de neoliberalismo” y la actividad “Ciclo de Conversatorios en Red”, intenta revisitar, veinte años después, aquella etapa compleja y polémica. Se consideran con especial atención los actores sociales que protagonizaron las protestas en dos ciudades intermedias cordobesas: Río Cuarto y Villa María, ambas con perfil agrario, de servicios y donde se localizan dos universidades públicas nacionales. Intentaremos responder interrogantes centrales: ¿Cómo pensar los actores sociales colectivos en clave teórica?, y a partir de aquí, ¿Quiénes emprendieron las acciones colectivas en nuestras localidades?; ¿En qué contexto y escala desarrollaron sus iniciativas?; ¿Cuáles fueron los repertorios predominantes? El sustento documental del trabajo se constituye a partir de una revisión crítica y actualizada de nuestra producción científica sobre el tema, mientras la perspectiva interdisciplinar fundamenta las aproximaciones teórico-conceptuales y los resultados empíricos.

Palabras clave: protesta social; actores colectivos; crisis de 2001; repertorios; Río Cuarto; Villa María

La protesta social y sus colectivos protagonistas en Río Cuarto y Villa María (diciembre 2001-febrero 2002)

María Virginia Quiroga
Celia Basconzuelo
Iván Baggini

Introducción

El ciclo 2001-2002 resulta especialmente significativo en la historia argentina reciente, porque trata de un período de *multicrisis* generalizada (Calderón, 2012) en el que se desestabilizó el orden social, político y económico vigente. A lo largo y ancho del territorio nacional se extendieron diversas protestas sociales con un heterogéneo abanico de repertorios de acción, portadoras de fuertes cuestionamientos y demandas de transformación.

Si bien existe una profusa producción académica sobre este tema, desde que se desencadenaron los hechos hasta la actualidad, la mayoría de las investigaciones están centradas en las áreas metropolitanas y capitalinas. En consonancia con ello, resultan escasos los análisis del devenir de la crisis y las reacciones que suscita en las ciudades intermedias del interior del país, especialmente en aquellas que conservan un perfil agropecuario y de servicios.

El presente capítulo pretende extender la mirada desde los acontecimientos ocurridos por entonces en las grandes ciudades del país, hacia espacios locales de la provincia de Córdoba: concretamente las ciudades de Río Cuarto y Villa María. En esa senda, y luego de recuperar nuestra definición de protesta social, nos preguntamos, en primer lugar: ¿cómo pensar los actores colectivos en clave teórica? y; a partir de aquí, ¿quiénes protagonizaron las iniciativas de protesta?; ¿cuáles fueron sus formatos predominantes de organización y los repertorios empleados?; ¿qué característica presenta el contexto y el espacio específico de actuación? Finalmente, respecto de las protestas en las dos ciudades estudiadas, ¿es posible avizorar algunas reflexiones en clave conectada y comparada?

Recuperando esos interrogantes, el objetivo de este trabajo se concentra en caracterizar a los actores sociales colectivos que se movilizaron en ambas ciudades durante la coyuntura de diciembre de 2001 y febrero de 2002. Para ello, se tienen en cuenta algunas dimensiones de estudio (organización, movilización y contexto), que permitirán interpretar, de manera preliminar, semejanzas y diferencias para dinámicas locales que marcaron la historia reciente argentina.

Es importante advertir que las reflexiones difundidas en este escrito se inscriben en la Red de cooperación “Actores sociales y políticos en tiempos de neoliberalismo”.¹ Asimismo, en esta

¹Red de cooperación “Actores sociales y políticos en tiempos de neoliberalismo. Dinámicas y articulaciones en espacios subnacionales de América del Sur”, en el marco de la Convocatoria Redes *Procesos Sociales y Políticos en América Latina*, de la Universidad Nacional de Villa María, Res.N°135/21

instancia nuestro abordaje mixtura apreciaciones cuantitativas y cualitativas, basadas sobre una revisión documental y periodística. Se obtienen datos de la actividad “Ciclo de Conversatorios en Red: El 2001 en las miradas locales”² y del proyecto de investigación titulado “Hacia un mapeo de la protesta social en ciudades intermedias y agro-universitarias de la provincia de Córdoba. Río Cuarto y Villa María en coyunturas históricas recientes y conflictivas (1989-2003)”³, el cual emprendió el relevamiento de las protestas de la etapa registradas por los principales periódicos de ambas ciudades: Puntal y El Diario del Sur de Córdoba.

Por su parte, el procesamiento y análisis de la información se basa sobre una perspectiva multidisciplinar, en la cual convergen particularmente la teoría sociológica, el enfoque histórico y el politológico. Desde nuestro punto de vista, los enfoques teóricos sobre las acciones colectivas y la protesta social, con especial énfasis en la dimensión de los actores movilizados, constituyen una puerta de entrada pertinente y atinada para reflexionar sobre la historia reciente en las ciudades que habitamos.

En cuanto a la organización del texto, partimos de precisar tres nociones clave en nuestro recorrido: protesta social, ciclo de protesta y actor social colectivo, al tiempo que de esta última trazamos algunas dimensiones para orientar el trabajo empírico. En un segundo momento, intentamos reconocer y caracterizar a los sectores sociales movilizados en las localidades bajo estudio. Finalmente, se incluyen algunas reflexiones en clave comparada sobre el devenir de los actores en las coyunturas y espacios trabajados.

Dos categorías operativas: protestas sociales y ciclos de la protesta

¿Qué es una protesta social? Ésta fue una pregunta inicial planteada en la construcción del itinerario conceptual del tema que nos llevó a indagar en un corpus bibliográfico que se nutrió de perspectivas clásicas y contemporáneas de la teoría sociológica y politológica a partir de las cuales se arribó a una diferenciación, respecto del conjunto de acciones colectivas, de aquellas que presentan una característica contenciosa. Así, entendimos por protesta social, una forma de acción colectiva situada, de carácter contencioso, deliberado, con visibilidad pública, protagonizada por actores sociales con demandas específicas que expresan un malestar o descontento y se dirige, directa o indirectamente, al Estado en sus diferentes niveles (Quiroga y Baggini, 2020). La propuesta teórica pretende distanciarse de definiciones esencialistas que vinculan a las protestas sociales con contenidos previamente determinados o con actores sociales delimitados *a priori* (Quiroga y Magrini, 2020), y procura sentar una noción lo suficientemente amplia que permita comprender tanto las iniciativas en un solo lugar y en un único momento, como las acciones encadenadas y dispersas en varios espacios simultáneos (Schuster, 2005).

¿Cómo analizar una protesta social? Luego, esta segunda pregunta nos llevó a proponer, desde una perspectiva interdisciplinar, dimensiones y subdimensiones que consideramos centrales para el abordaje empírico de las acciones contenciosas teniendo en cuenta: espacios, tiempos,

²Actividad virtual de vinculación social e institucional avalada por la Secretaría de Vinculación Social e Institucional, el CEGRA, y el Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNRC, noviembre de 2021. Resol. CD. 340/2021. Contó con exposiciones de funcionarios públicos y referentes sociales que se manifestaron en torno a los sucesos del 2001.

³ El proyecto PID-2018 titulado “Hacia un mapeo de la protesta social en ciudades intermedias y agro-universitarias de la provincia de Córdoba” fue aprobado y financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba. Resolución Ministerial N° 144/2018. Dirigido por Celia Basconzuelo, codirigido por Virginia Quiroga, e integrado por Iván Baggini, Marcela Brizzio, Claudia Kenbel, Aimé Aminahuel y María Eugenia Isidro (UNRC). Período: 2019-2021.

actores, movilización y alteridad, y cuya operacionalización se respalda en una metodología integradora de técnicas de análisis de los datos cuali y cuantitativa.⁴

¿Cómo vincular la temporalidad histórica con la dinámica de una protesta social? Aquí es fundamental recalar en la noción de *ciclo de protestas*, que de acuerdo con Sidney Tarrow (1997: 263-264) puede entenderse como:

una fase de identificación de los conflictos y la confrontación en el sistema social, que incluye una rápida difusión de la acción colectiva de los sectores más movilizados a los menos movilizados; un ritmo de innovación acelerado en las formas de confrontación; marcos nuevos o transformados para la acción colectiva; una combinación de participación organizada y no organizada; y unas secuencias de interacción intensificada entre disidentes y autoridades que pueden terminar en la reforma, la represión y, a veces, en una revolución.

El concepto nos permite pensar la especificidad de un conjunto de acciones contenciosas cuando se presentan como un ciclo articulado, se caracterizan por un aumento en el nivel de frecuencia del conflicto que incluye a diferentes sectores sociales, que pueden o no haber tenido experiencia previa, pero que articulan su demanda o demandas y legitiman su reclamo a través de nuevos marcos referenciales o significativos. También comprende una rápida difusión territorial del conflicto y cambios de escala de la protesta (local, provincial, nacional o viceversa), por lo que resulta necesario examinar los mecanismos que facilitan su expansión y las redes explícitas o subyacentes de quienes organizan el movimiento, así como la disponibilidad de canales de comunicación que favorecen la dispersión de los marcos de sentido, tácticas y repertorios. *Ciclo de protestas* es así un concepto fructífero en nuestra indagación, contribuyendo a aprehender la intensidad, diversidad, expansión, movimiento de las acciones colectivas contenciosas en la dimensión temporal bajo estudio.

El sujeto de las protestas sociales: los actores sociales colectivos

En términos generales, puede entenderse por actores colectivos una agrupación de personas que coordinan esfuerzos en el marco de una acción colectiva para alcanzar objetivos compartidos: económicos, culturales, políticos, de reconocimiento, entre otros (Guzmán-Miranda y Caballero Rodríguez, 2016). Se hallan referenciados prácticamente en todos los campos de las ciencias sociales. Distintos paradigmas, clásicos y contemporáneos, ofrecen al respecto perspectivas y herramientas de análisis que resultan de gran utilidad para comprender la complejidad y heterogeneidad de su composición. A pesar de contar entonces con un número importante de contribuciones, llama la atención la casi ausencia de una mirada actualizada acerca del conjunto de dimensiones que confluyen para explicar la conformación de un actor colectivo, independientemente de la forma que éste adopte (movimiento social, organización, asociación, grupo de interés, etc.). Dimensiones que puedan recalar en aspectos micro y macro, objetivos y subjetivos, y den cuenta de dinámicas e interrelaciones que condicionan o potencializan ese conjunto abigarrado de sujetos que se conforman, trabajan y operan en la arena pública de la sociedad, en un tiempo histórico y en un espacio concreto.

Con el propósito de abordar el estudio de actores colectivos proponemos algunas dimensiones y subdimensiones de análisis junto con sus respectivos indicadores que abrevan principalmente en una literatura sociológica e histórica contemporánea y reciente. En este trabajo

⁴ Véanse las definiciones de estas dimensiones y subdimensiones en nuestro trabajo colectivo *¿Cómo estudiar las protestas sociales en clave local?* (Basconzuelo, Quiroga, et. al., 2022).

nos ocuparemos principalmente de tres (*organización, movilización y contexto*) aunque cabe señalar que otras igualmente pueden ser consideradas, tales como trayectoria e identificación.

Conviene sentar una precisión más. Nuestra proposición conceptual sobre actores colectivos implica considerar desde un punto de vista relacional dichas dimensiones de análisis, de manera que cada una de ellas se piensa en articulación con las otras, aunque se estudien por separado a los fines analíticos. En su conjunto pueden ser aplicables tanto para el estudio de actores colectivos tradicionales (sindicatos, asociaciones, cooperativas, ONG, grupos de interés, etc.) como novedosos (movimientos sociales, socio-territoriales, ambientales, feministas, etc.).

La organización

El estudio de la dimensionalidad organizativa implica ir al encuentro de, al menos, dos cuestiones: ¿cuál es el nivel de organización que adquieren los actores colectivos? Y ¿cuáles son las formas organizativas que adoptan para llevar a cabo sus acciones colectivas?

Para Tilly (1978), la organización es un elemento presente en la dinámica de la movilización. Las formas organizativas suponen una interacción entre los miembros del colectivo, la pertenencia, la estructura adoptada, ya que incide en su capacidad de movilización. Sin embargo, Eder (1991) considera que las formas organizativas aparecen en un segundo momento de la constitución de los actores colectivos, cuando se resuelve la estructura institucional a adoptar y en función de ello las lógicas de la acción colectiva. Por su parte, cuando Mc Adam, Mc Carthy y Zald (1999: 24) estudian los movimientos sociales sientan el término “estructuras de movilización” para referir precisamente “los canales colectivos tanto formales como informales, a través de los cuales la gente puede movilizarse e implicarse en la acción colectiva”.

Es decir que el *nivel organizativo* cuenta al momento de considerar si los colectivos se agrupan de manera informal o bien le otorgan a su entidad representativa un perfil institucional. La institucionalización implica dotar a la forma organizativa con la cual se identifica el colectivo social de cierta estructura, normativas fundacionales e incluso reglamentaciones por escrito. (Giner, Lamo de Espinosa y Torres, 1998: 140). En este punto, el reconocimiento jurídico de su existencia, unido a su permanencia, resultan componentes fundamentales. Ahora bien, “las nociones de formal/informal no constituyen una dicotomía, sino un continuo; no todo es formal en las organizaciones que alcanzan un nivel institucionalizado ya que los aspectos explícitamente establecidos pueden coexistir con otros informales” (Ibídem: 549).

Luego, *las formas organizativas* que pueden adoptar los actores para organizarse son de una amplia variedad; sin embargo, pueden indicarse algunas características básicas. De acuerdo con los fines específicos y según la diferenciación de funciones pueden clasificarse, entre otras formas, como asociativas (sindical/empresarial/partidario/religioso/territorial) y civiles (autoconvocado o multisectorial).⁵

El formato asociativo constituye una de las estructuras más clásicas, agrupando a organizaciones voluntarias donde los ciudadanos expresan su capacidad de actuar juntos, hacen oír su voz, asumen responsabilidades crecientes sobre su propio destino, construyen consenso y valores comunes y confieren legitimidad a la vida pública y a sus instituciones. En general las formas asociativas intentan contribuir para dar respuestas a las transformaciones que los ciudadanos demandan, al tiempo que promueven el bien común (Di Stefano, Sabato, et al. 2002). Por su parte, la forma civil describe conceptualmente una organización que surge a instancias de la movilización de ciudadanos y puede desarrollarse de modo espontáneo (autoconvocados), o bien una modalidad

⁵ Para ampliar la información o consultas puede revisarse el proyecto de investigación citado en la nota 3.

mixta (multisectorial) caracterizada por reunir la iniciativa y participación mancomunada de diversos sectores, tanto institucionalizados como no.⁶

En síntesis, preguntarse por la dinámica organizacional de los actores colectivos implica considerar los niveles y las formas que libremente escogen quienes participan voluntariamente de una agrupación de personas, en relación también con los recursos disponibles y su lugar en la estructura social.

La movilización

Preguntarse por esta dimensión es conocer ¿qué modalidades o registros eligen los colectivos sociales para concretar eventos mediante los cuales se presentan en la escena pública?

Cabe señalar, primeramente, que la movilización se apoya en una fase organizativa previa, pero no se halla condicionada necesariamente a la existencia de una sólida estructura organizativa. Requiere de un elenco social (organizadores, líderes movilizados y participantes), apela a repertorios de acción y recursos para concretarla.

Es fundamental contar con organizadores o activistas. Son ellos quienes buscan contactar a los simpatizantes y formar un potencial movilizador activando redes y relaciones. Mientras los líderes alientan y conducen la movilización, los participantes constituyen el conjunto de individuos que expresan una posición favorable para integrar ese colectivo (Javaloy, Rodríguez y Espelt, 2001).

Como tal, este aspecto atisba una serie de actitudes y procesos que convergen para ello. ¿Cómo se lleva a cabo el pasaje de la individualidad a la integración colectiva? ¿De acuerdo con cuáles criterios se organiza el actor colectivo? Es necesario que en esta dimensión puedan considerar las interacciones entre los actores, el papel de las redes sociales preexistentes que promueven la participación, así como las circunstancias biográficas particulares que pueden explicar la predisposición a integrar el colectivo (Javaloy, Rodríguez y Espelt, 2001).

Seguidamente, la movilización, según se dijo, requiere de repertorios de acción. Este concepto remite a las formas de expresar una reivindicación en defensa de demandas específicas o generales; presentan variaciones y registros infinitos. Dependen de las particularidades del actor movilizado, del contexto de situación. Pueden modificarse a lo largo del tiempo y convivir inclusive con antiguos usos (Neveux, 2002). Otorgan soporte a la reivindicación de la demanda y contienen una dimensión expresiva de la identificación colectiva.

Conviene detenerse en algunos referentes y atisbar las propuestas de los elementos que la conforman. Sydney Tarrow (1997) emplea la noción de “repertorio” para aludir a los tipos de acción desarrollados por los actores en sus contextos. Charles Tilly (1986: 541-542) proponía esa expresión para designar “las maneras de actuar en común sobre la base de intereses compartidos”. Esas diferentes maneras de acción componen un repertorio”; en tanto, “el repertorio en uso dicta la acción colectiva”. Un repertorio difiere según los tiempos y los espacios sociales, es estratégico y limitado ya que la opción por utilizar un repertorio en vez de otro depende de las configuraciones formadas por los aliados y los adversarios (Offerlé, 2012).

Para Tamayo (2016:71) “los repertorios de la movilización son componentes insustituibles de la acción colectiva, no únicamente en términos pragmáticos que confrontan una fuerza visible social contra los adversarios, sino un mecanismo de explosión de fuertes emociones que sacuden conciencias”. Es decir, los repertorios son formas objetivas que vehiculizan componentes subjetivos.

⁶ Véase nuestro proyecto de investigación (PID 2018), ya citado.

Los repertorios pueden presentarse bajo un formato convencional (petitorio, asamblea, huelga, paro, marcha, manifestación, toma, saqueo, olla popular, apagón, rebelión fiscal, etc.) o novedoso (intervención artística, escrache, corte de vía pública, cacerolazo, caravana de autos, etc.)

Además de los repertorios, las movilizaciones demandan recursos como ser el empleo del correo tradicional y del correo electrónico, el teléfono y la telefonía móvil (Javaloy, Rodríguez y Espelt, 2001) y actualmente las redes sociales. Un aspecto no menor son las características del entorno contextual que pueda facilitar la accesibilidad, disponibilidad y tipos de los recursos, tanto humanos (mano de obra, organizaciones) como materiales (dinero) (Edwards y Mc Carthy, 2004).

En síntesis, puede definirse la movilización como un proceso objetivo de activación del colectivo social a través del cual se canaliza la acción colectiva. Requiere de un elenco social organizador y participante, apelando además a repertorios de acción y recursos para concretarla.

El contexto

Otorgar relevancia a las tramas contextuales en las cuales se sitúan y actúan los actores colectivos implica ocuparse de los procesos macro. He aquí una premisa que consideramos de fundamental importancia ya que como bien señalan “las instancias de acción colectiva a menudo se tratan como eventos independientes que pueden ser entendidos fuera de sus contextos espaciales e históricos”, cuando en realidad se trata de instancias con plena conexión histórica y espacial (Koopmans, 2004: 32).

Entonces, si el accionar de los colectivos sociales se halla en interdependencia con los contextos temporales y espaciales, cabe preguntarse ¿cuáles son las condiciones sociopolíticas, económicas y culturales generales que enmarcan las actuaciones colectivas? Y ¿cuáles son las específicas que caracterizan el espacio de la acción colectiva?

Para Manuel Garretón (2001: 13), la matriz socio política es el marco analítico y conceptual desde el cual pueden analizarse los actores, su constitución e interacción, de manera que los procesos que allí se generan “son vistos como creaciones históricas de esos actores y no como resultantes ineluctables de factores o fenómenos estructurales de los que los actores son simples portadores o reproductores”.

Abordar la dimensión contextual implica detenerse pues en los marcos de referencia, teniendo en cuenta que los procesos sociales, económicos y políticos que se constituyen desde la exterioridad del actor colectivo no lo hacen como un factor determinante -tal como lo postulaba la escuela estructuralista- sino condicionante de la agencia, con capacidad de impactar, de alterar el curso y la dinámica organizativa del actor; es decir, enmarcan las acciones, pero en ningún caso determinan al sujeto plural.

Ese contexto en su nivel macro tiene en cuenta la estructura en su conjunto, y trata de rescatar las circunstancias más generales; esto es, aquellos factores externos (internacionales, nacionales) que son, en muchos casos, estructurantes más que determinantes del comportamiento (Tamayo, 2016). Se localizan allí las características económicas, políticas y sociodemográficas, las relaciones sociales capitalistas, la división internacional del trabajo, el impacto de la economía mundial en el desarrollo del país, entre otros aspectos.

El espacio subnacional, en cambio, integra un subnivel contextual y comprende el entorno de proximidad en que los actores colectivos desenvuelven sus acciones, y cuyo alcance puede ser provincial o municipal. Siempre deben ser pensados en forma conectada, es decir, en articulación con el contexto, ya que los fenómenos sociales lugareños que allí ocurren no podrían ser

considerados como meros reflejos o adaptaciones, sino procesos y actores vinculados con las instancias generales (Leoni y Solís Carnicer, 2012; Frederic y Soprano, 2009).

Por contexto se entenderá pues el entorno de condiciones sociopolíticas, económicas y culturales generales que enmarcan la configuración de un actor colectivo en un período determinado, así como las específicas que particularizan el espacio subnacional de la acción, sea provincial o municipal.

En síntesis, el trabajo arriba a una construcción conceptual y metodológica que problematiza el estudio de los actores colectivos, y se estructura sobre la base de dimensiones de análisis, luego observables empíricamente mediante un proceso de operacionalización.

Las ideas que anteceden conducen a sentar algunos elementos de definición preliminares, por lo que podría inferirse que un actor colectivo es un sujeto social que apela a formas organizativas y capacidad para generar un curso de acciones en común, mediante repertorios que le otorgan visibilidad en un contexto temporal y subnacional concreto.

Abordaje empírico de los actores sociales colectivos y sus protestas

La presentación teórica del tema se constituye en el marco referencial de su abordaje empírico el cual se organizó a partir de las dimensiones descritas con la intención de reconocer y caracterizar a los actores sociales colectivos que se movilizaron en Río Cuarto y Villa María entre diciembre de 2001 y febrero de 2002.

Actores

Teniendo presente quienes protestaron en ambas ciudades, podemos destacar el protagonismo de diferentes sectores de trabajadores (personal de salud, docentes de nivel inicial y medio, docentes y no docentes universitarios, empleados) de la administración pública nacional, provincial y municipal, entre otros), como así también, el accionar de los comerciantes, productores agropecuarios, vecinos de barrios periféricos y ciudadanía autoconvocada en general.

En Río Cuarto cabe subrayar la centralidad que adquirió el sector comercial y empresarial local, por una parte, y los ciudadanos autoconvocados, por la otra, en el desarrollo de las convocatorias y acciones contenciosas desde mediados de diciembre, pero especialmente en enero. Nucleados en el Centro Comercial, Industrial y de Servicios (CECIS), los comerciantes develaron el malestar con la política económica y las medidas fiscales, pero no lograron consenso en la totalidad de los adherentes a la institución sobre las acciones, medios y modalidades de la protesta. Vale advertir, entonces, que este sector se fragmentó a la hora de continuar con las protestas: por un lado, los “comerciantes o empresarios vinculados al CECIS”, y, por otro, los comerciantes que se acercaron a lo que llamaron “ciudadanía autoconvocada”.

Las noticias que registra Puntal sobre las manifestaciones conjuntas señalan la convergencia en los motivos de su reclamo y en la capacidad de aglutinar a otros sectores sociales para protestar, pero, a su vez, destaca la violencia como un factor de distanciamiento y enfrentamiento entre los comerciantes locales disidentes y los representantes del CECIS, al señalar uno de sus integrantes que: “[la entidad] ratificó la protesta frente al Concejo Deliberante [pero] no vamos a agredir ni insultar a nadie” (Puntal, 17/01/2002:4) para diferenciarse de los comerciantes y ciudadanos autoconvocados.

Otros actores, que también se desarrollaron contenciosamente, fueron los taxistas, empleados de la industria de la alimentación y trabajadores privados pertenecientes a la rama de la

construcción, pero sus acciones fueron esporádicas y no se constituyeron en protagonistas recurrentes de la protesta en Río Cuarto durante los meses de enero y febrero de 2002.

En el caso de la ciudad de Villa María, los actores contenciosos estuvieron conformados por los trabajadores, los comerciantes y empresarios con representación gremial en la Asociación de Empresarios de la Región Centro Argentino (AERCA), los comerciantes disidentes de dicha entidad, los productores tamberos y los desocupados. Estos grupos distinguibles tuvieron un protagonismo sostenido, aunque, hacia el mes de enero, la convocatoria y organización de las protestas se fue aglutinando de manera paulatina alrededor del reclamo del sector mercantil y empresarial. En efecto, la prensa local les atribuye un rol protagónico en el curso de las acciones contenciosas a partir del momento en el cual la entidad se segmenta entre quienes apelan a pertenecer a ella y quienes deciden su separación por motivos de disidencia en cuanto al desarrollo de los canales de participación contestataria. Mientras que algunos comerciantes y empresarios continuaban agrupados en AERCA y consideraban que “el tiempo de la protesta en la calle se terminó [y que] no podemos echar más leña al fuego frente a la situación que se está viviendo [y es necesario] buscar soluciones en el marco del diálogo por lo que se gestionaron reuniones con las autoridades municipales y provinciales” (El Diario, entrevista a Sergio Montagner, presidente de AERCA, 23/1/2002:3); los autodenominados comerciantes y empresarios “chicos” (El Diario, 20/1/2002:3) buscaban en los canales no institucionales de participación hacer notorio su disconformidad ante las autoridades gubernamentales en cuanto a política cambiaria, económica y financiera.

Al igual que en la localidad de Río Cuarto, los comerciantes autoconvocados entretejieron vínculos con los ciudadanos autoconvocados. Dicha alianza adquirió mayor sinergia en oportunidad de realizarse la protesta masiva del 25 de enero de 2002 en adhesión al llamado “cacerolazo nacional” (El Diario, 26/1/2002:2-4). Según la fuente relevada, los ciudadanos autoconvocados, a pesar de conformar un grupo minúsculo al inicio (El Diario, 15/1/2002 y 16/1/2002), lograron erigirse como un colectivo con presencia y estabilidad temporal.

El panorama se completa con los productores tamberos autoconvocados de la cuenca lechera de Villa María y los desocupados. Ambos actores tuvieron su emergencia a nivel local en la conflictividad previa a los sucesos de diciembre de 2001 pero, durante ese mes hubo una radicalización del enfrentamiento entre los tamberos y el aparato gubernamental. Por su parte, los desocupados siguieron una trayectoria propia en el desarrollo de la protesta, sin entablar vínculos con el resto de los actores y orientados a peticionar ante las autoridades para satisfacer sus demandas de trabajo y alimentación. Según El Diario, el sector no logró consolidarse en tanto actor cohesionado, sino tendiente a la división interna entre quienes estaban nucleados en la Comisión Autoconvocada de Desocupados y aquellos que lo hacían de manera independiente de toda representación (El Diario, 17/1/2002 y 24/1/2002).

La organización

Esta dimensión de estudio se refiere, como se señaló en páginas anteriores, a los procesos de interacción entre los actores, la estructura y el formato organizativo que incide en la dinámica de la movilización. De allí que el nivel organizativo de quienes protestan se considera variado a lo largo de los meses bajo estudio, fluctuando desde expresiones institucionalizadas a no institucionalizadas y articuladas.

En ese sentido, las instancias de representación gremial aparecen como las formas predominantes de organización en ambas ciudades, pero no son excluyentes de otras modalidades. Destacan, por ejemplo, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), las gremiales de docentes universitarios; además, las entidades sindicales de mayor porte como la

Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y la Confederación General del Trabajo (CGT), con especial presencia en la jornada de paro nacional del 13 de diciembre que tuvo importante acatamiento en las dos ciudades bajo análisis.

Es notable, además, la presencia de entidades de representación empresarial que se articularon a los sectores vinculados al comercio y a la actividad agropecuaria. En Río Cuarto, los comerciantes se nuclearon bajo la órbita del mencionado CECIS y, otro conjunto de ellos, lo hizo de manera autoconvocada (tal como referimos en el apartado anterior). En Villa María, el sector siguió una dinámica similar a la de Río Cuarto, ya que un conjunto mayoritario se nuclea en torno a la AERCA, y otro grupo de comerciantes “disidentes” o “chicos”, se escindió acercándose a los ciudadanos autoconvocados (El Diario, 20/1/2002:3).

Como dimos cuenta antes, las entidades de representación del agro también constituyeron importantes plataformas organizativas. En Río Cuarto, pudo visibilizarse mayor grado de institucionalización en el marco de la Sociedad Rural Argentina (SRA-sede Río Cuarto). Esta entidad, incluso, articuló sus acciones en varias oportunidades con los comerciantes y empresarios del CECIS, impulsando iniciativas conjuntas como notorios exponentes del perfil productivo de la ciudad. En Villa María, se destacó el accionar colectivo de los productores tamberos autoconvocados de la cuenca lechera y el diseño de las protestas de este sector estuvo alineado con lo dispuesto por las entidades nacionales sin llegar a involucrarse con el reclamo de otros actores (El Diario, 18/1/2002).

Es pertinente advertir que en esa localidad se conformaron algunas instancias multisectoriales relevantes que protagonizaron iniciativas contenciosas a lo largo de los años 2001 y 2002 como el Foro en Defensa de la Seguridad Social. Se trataba de una entidad que reunía a diversos sectores, tales como: ATE, trabajadores de prensa, docentes universitarios, empleados de la DGI, del PAMI, ANSES, y de otras reparticiones nacionales con presencia en la ciudad. Además, se destaca la Mesa de Compromiso Social, con especial presencia en los momentos más críticos de fines de diciembre. Si bien no era una alternativa que se dedicara a organizar acciones colectivas contenciosas de reclamo, pretendía dar respuesta a la demanda social. Estaba integrada por múltiples instituciones, fundamentalmente la Iglesia -a través de Cáritas parroquiales- y el Municipio -a través de la Secretaría de Integración Comunitaria- que monitoreaban el acceso a los alimentos por parte de las familias de los barrios más humildes de la ciudad.

En general, los datos relevados para ambas ciudades muestran que las formas organizativas no adhieren a un diseño único sino, más bien, aparecen diversificadas y combinadas en formatos de protesta institucionalizados, autoconvocados y mixtos.

La movilización

Tal como fue indicado con anterioridad, la dimensión de la movilización de los actores, requiere previamente y durante su desarrollo de líderes que aprehendan el interés colectivo y que puedan encauzar la convocatoria, además de repertorios de acción y recursos. Las fuentes periodísticas consultadas nos permiten advertir que se ha recurrido a variados repertorios de acción: huelgas y asambleas de trabajadores de diferentes quehaceres, cortes parciales de calles, movilizaciones y caravanas con autos y tractores. Los mismos no muestran grandes cambios respecto de las modalidades que se venían empleando en iniciativas anteriores, aunque se irán sumando con mayor presencia y especificidad los cacerolazos.

Interesa reparar especialmente en las jornadas del 19 y 20 de diciembre, ya que representan el *clímax* de las protestas sociales a nivel nacional (o, mejor dicho, metropolitano); al respecto, nuestras dos ciudades evidenciaron algunas discrepancias. Según las fuentes relevadas, durante aquellos días, la ciudad de Villa María no registró acciones directas en los espacios públicos. No

obstante, El Diario enfatiza el fuerte accionar del municipio y de la Iglesia procurando dar respuestas inmediatas al malestar social vinculado con la falta de alimentos; lo que habría contribuido a calmar los malestares (El Diario, 27/12/2001). En contraste, las protestas del 19 y 20 de diciembre adquirieron notoria visibilidad pública en Río Cuarto. Confluyeron varias acciones colectivas a lo largo de los diferentes espacios de la ciudad: caravana de protestas, movilización, huelga, incluso en las primeras horas de la noche se registraron intentos de saqueos en dos supermercados.

En ambas ciudades los cacerolazos aparecen como repertorios más frecuentes en enero y febrero. En Río Cuarto, se sucedían regularmente todos los jueves, tanto en Plaza Roca (la plaza central) como en Plaza Olmos (que se encuentra frente al edificio del Municipio). También se sumaron iniciativas como escraches a determinados políticos locales, entrega de peticiones a las autoridades gubernamentales y ollas populares.

Otra innovación en cuanto al repertorio que comenzaría a ser frecuente en la protesta en ambas ciudades fue el paro empresarial⁷, que en el caso de Río Cuarto resultó encabezado por el CECIS y en Villa María por AERCA, además de los comerciantes autoconvocados y los productores tamberos. Estos últimos, agudizaron su reclamo en enero de 2002 por la inviabilidad de su producción y negocio y pusieron en relieve a un actor y un formato de protesta ligado al perfil agroganadero de Villa María.

Por su parte, las asambleas ciudadanas se potenciaron como un repertorio novedoso, popular y con espíritu antipolítico, en ambas localidades (Puntal 26/1/2002: 4; El Diario 26/1/2002: 2 a 4) en consonancia con lo sucedido en las principales ciudades del país. Estaban constituidas por individualidades que representaban el amplio espectro social local; actores no corporativos, sino heterogéneos, de carácter civil en donde se mezclaban los integrantes de distintos sectores de profesionales independientes, empleados públicos y privados y ciudadanos que se autoidentificaban como miembros del pueblo (“Si éste no es el pueblo, el pueblo dónde está”. El Diario, 25/1/2002:3), como una entidad global que diluía lo particular y se asociaba a los valores democráticos que pretendían mantener ante la crisis de representatividad política. Ejemplo de lo anterior resultaron algunas expresiones testimoniales como “no queremos políticos, ni sindicalistas, ni discursos...queremos argentinos (El Diario, 21/1/2002:3) [...] hemos demostrado que somos villamarienses de bien [o aquellas identificaciones atribuidas por la prensa como] seguía el pueblo en la calle, con dignidad y con ansias de dignidad [...] la gente permaneció dando muestras de una gran cultura cívica y ciudadana” (El Diario, 25/1/2002:3-4).

En cuanto a los liderazgos que convocan a las movilizaciones y los recursos, las fuentes revelan una información parcial sobre estos aspectos; no obstante, consideramos que no existe un estilo de liderazgo único en el desarrollo de la movilización pues ante la existencia de liderazgos institucionalizados y centralizados en el grupo dirigente de las organizaciones, aparecen estilos más descentralizados en donde las decisiones se toman de manera colectiva y democrática, siendo las asambleas un ejemplo de esta nueva modalidad de repertorio de la acción. En cuanto a los recursos, se sigue la misma característica que la anterior, es decir, su diversificación a pesar de que la ocupación del espacio público colectivo (plazas céntricas de ambas ciudades, edificios municipales) siguen siendo los lugares simbólicos en el cual convergen los actores movilizados en aquellos tiempos de crisis.

⁷ Esta categoría es el resultado de las reflexiones realizadas por quienes integramos el proyecto de investigación indicado en la nota 3 y que alude a la medida de fuerza que consiste en la paralización total o parcial de las actividades de uno o varios establecimientos o actividades económicas, por decisión del empresario o patrón, quien puede proceder del ámbito agrario, comercial e industrial.

El contexto

Las condiciones contextuales vinculadas a la etapa 2001-2002 han trascendido en la memoria colectiva como un ciclo crítico de la historia argentina reciente, marcado por profundos cuestionamientos, desestabilizaciones y búsquedas alternativas. Algunos estudios caracterizaron a este período como una crisis orgánica que dislocó el orden vigente a partir de la combinación de desajuste fiscal, financiero, social, político e institucional (Pucciarelli y Castellani, 2014). Otros enfatizaron las serias complicaciones de un escenario en el que se vieron interrumpidos la regularidad del dinero, la propiedad y la autoridad política; a la vez que, proliferaron las dificultades para la reproducción de la vida cotidiana y la regulación de la convivencia social (Grüner, 2003; Pérez, 2010).

Sendas producciones abordaron la multiplicidad de acciones colectivas durante la etapa en cuestión (Almeyra, 2004; Gómez y Massetti, 2009; Palomino, 2005; Pérez, 2008 y 2010; Scribano y Schuster, 2001; Schuster et. al., 2005; Svampa, 2011); incluso, algunas de ellas repararon especialmente en el devenir de las protestas en localidades del interior del país (Delamata, 2002; Giarracca et. al., 2007) y, particularmente, en la provincia de Córdoba (Ciuffolini, 2008; Gordillo, 2010; Gordillo et. al., 2012). Destacan, a su vez, algunas investigaciones que hicieron énfasis en las ciudades de Villa María y Río Cuarto (Reynoso, 2019; Hurtado, 2019; Carini, 2019; Quiroga y Baggini, 2020), aunque no conjuntamente sino como abordajes independientes.

A pesar de ello, el devenir de las protestas ha sido vinculado, en las diversas investigaciones aludidas, con las consecuencias del dislocamiento socioeconómico que experimentaban grandes sectores de la población. De allí que, con miras a caracterizar cuantitativamente la situación de ese período conflictivo, resulta útil recordar algunos datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda del año 2001⁸. Para el Departamento Río Cuarto, la población mayor de 14 años era de 176.130 habitantes (recordamos que el total departamental era de 229.728), la población económicamente activa era de 100.306 (56,95%) y la población económicamente inactiva (estudiantes y jubilados/pensionados que no trabajan ni buscan trabajo) era de 75.824 (43,05%). A su vez, la población económicamente activa se subdivide en población ocupada (76.730 habitantes, 76,49%) y desocupada (23.576 habitantes, 23,50%). La cantidad de hogares con necesidades básicas insatisfechas era de 7.570 (10,8%) de un total de 69.846 hogares censados.

Por su parte, en el Departamento General San Martín (al que pertenece la ciudad de Villa María), la población mayor de 14 años era de 88.386 habitantes (el total departamental era de 116.107); la población económicamente activa era de 41.257 (46,68%) y la población económicamente inactiva era de 35.671 (40,36%). Al consultar la fuente, se advierte que no se desagrega la información entre ocupados y desocupados de la población económicamente activa, quedando incompleto ese dato. La cantidad de hogares con necesidades básicas insatisfechas era de 3.288 (9,4%) de un total de 35.092 hogares censados y 11.449 habitantes (10,0%) con necesidades básicas insatisfechas de un total de 114.912 censados.

Numerosos son los análisis que pueden realizarse a partir de los datos estadísticos presentados anteriormente, pero nos concentramos en señalar que la situación social y económica de los Departamentos Río Cuarto y General San Martín para el 2001 resultaba preocupante en la condición de los desocupados, jefes de hogar y las necesidades básicas insatisfechas que pueden ser interpretados como altos si se considera el total de la población económicamente activa. Condiciones que se agudizaron a partir de los estallidos de diciembre de ese año.

⁸ La dificultad que nos presenta la fuente consultada radica en la no desagregación de los datos por municipio y solo los menciona a nivel departamental, de allí que los datos no se circunscriben exclusivamente a las localidades de interés para nuestro estudio.

Sumando a lo anterior, es interesante señalar que, para el caso de Río Cuarto, diversas noticias en el periódico local advierten sobre la delicada situación social en la coyuntura del cambio de siglo. Se alude, por ejemplo, al crecimiento de la pobreza⁹, el desempleo¹⁰, la desigualdad social¹¹ y la recesión económica¹². Al mismo tiempo, en reiteradas ocasiones se hace referencia al fuerte incremento de la demanda social al municipio y las manifestaciones de descontento con la dirigencia política. Por su parte, para Villa María, la fuente no presenta como noticioso la problemática social y económica de manera independiente de las acciones de protesta, más bien, destaca en reiteradas oportunidades que el clima de incertidumbre política y la crisis económica son los factores que explican causalmente dichas manifestaciones sociales.

Las acciones colectivas contenciosas presentaron momentos de mayor intensidad entre los meses de diciembre de 2001 y febrero de 2002, de allí que nuestro análisis se circunscribe especialmente a esa etapa. Allí se sucedieron iniciativas cruciales y álgidas en ambas ciudades, de modo sincrónico a lo ocurrido en el ámbito nacional. Al respecto, en trabajos previos (Quiroga y Baggini, 2020), señalamos que la conflictividad social no es exclusiva de esa coyuntura, pero consideramos que, durante la misma, la frecuencia de la protesta, su intensidad e impacto hicieron que los meses señalados puedan ser definidos como los “momentos de locura” que marcan la cúspide de un ciclo de protesta (Tarrow, 1991). Así, el relevamiento de las fuentes periodísticas nos permite indicar que se registraron 22 protestas en Río Cuarto (10 en diciembre, 6 en enero y 6 en febrero) y 22 para Villa María (6 en diciembre, 9 en enero y 7 en febrero).

Algunos hallazgos, conclusiones y proyecciones de la protesta social situada

Tal como hemos expresado en el apartado precedente, el lapso diciembre de 2001 - febrero de 2002 revela un clima de malestar generalizado en las dos localidades bajo estudio, con múltiples reacciones a las complejas condiciones del contexto que arrojaban índices crecientes de desempleo y pobreza. Este escenario podía notarse en las extensas colas en las puertas de los bancos, en la presencia de mayores controles de seguridad en hipermercados y grandes locales comerciales, y en diversas iniciativas de protesta en los espacios públicos: la plaza central, la universidad, las intersecciones con la ruta, el palacio municipal, entre otros.

En términos generales, cabe señalar algunas primeras diferencias en cuanto a la frecuencia y la intensidad de las acciones colectivas contenciosas. Si bien ambos casos muestran un total de 22 protestas; en Río Cuarto su frecuencia fue decreciente desde diciembre a febrero, y en Villa María resultó en ascenso. La intensidad de las iniciativas, asociada a los hechos de violencia registrados,

⁹Durante el primer semestre del 2001 encontramos notas del periódico que apuntan a la creciente demanda de ayuda social al Municipio (por ejemplo: “31% de la población, es decir, 50.000 personas del total de los habitantes perciben algún tipo de ayuda social municipal” Puntal, 16/05/2001). Hacia fines del 2001, el diario destaca el crecimiento de los indicadores de pobreza que alcanzarían al 30% de los riocuartenses (Puntal 11/12/2001). En agosto de 2002 los indicadores del INDEC, revelan que “en Río Cuarto la mitad de la población es pobre y el 20,2% es indigente” (Puntal, 22/08/2002).

¹⁰ En diciembre de 2001 el periódico Puntal alude a un crecimiento del 35% en los índices de desempleo; además, registra los numerosos pedidos de seguros en ANSES y las solicitudes masivas en el marco del programa nacional nuevo empleo (Puntal, ediciones de enero de 2002) y, luego, en el marco del PJJHD (Puntal, ediciones de mayo y junio de 2002).

¹¹“Los ricos ganan 23 veces más que los pobres en Río Cuarto” (Puntal, 06/09/2001). “En Río Cuarto los ricos ganan 38 veces más que los pobres”, citando estimaciones del INDEC (Puntal, 22/05/2002).

¹²Las ediciones de Puntal de mediados del 2001 registran las caídas en la recaudación municipal producto de los recortes a nivel nacional y provincial. En relación a las ventas en el comercio también se habla de “caídas del orden del 5 por ciento” (Puntal, 24/06/2001) y del “cierre de cincuenta empresas en un año” (Puntal, 15/06/2001).

se advierte con mayor nitidez en Villa María. Así, por ejemplo, la fuente relevada señala que, en dicha ciudad, la violencia fue un recurso recurrente, especialmente durante el mes de enero, al estar presente en cuatro de las nueve protestas. En cambio, de las seis protestas acaecidas durante enero en Río Cuarto, el periódico Puntal remarca que sólo una de ellas estuvo acompañada por expresiones violentas (agravio verbal al sector político local y físico entre los participantes y policías).

En relación a los *actores* y las dinámicas de *organización y movilización*, encontramos en las dos ciudades la presencia de sectores sociales variados, que, en la mayoría de las oportunidades, solo pudieron construir alianzas puntuales y esporádicas. Diferentes grupos fueron evidenciando discrepancias internas en cuanto a los formatos de organización y canalización de los reclamos, tal es el caso por ejemplo de los tamberos y desocupados en Villa María, y de los empresarios y comerciantes en ambas localidades. También pudieron advertirse algunas discontinuidades en los actores de mes a mes, asociado quizás con las vacaciones de enero. En ese sentido, para el primer mes del 2002 no encontramos noticias de iniciativas protagonizadas por sectores muy presentes en diciembre: los docentes universitarios, los trabajadores de las reparticiones públicas, entre otros.

En materia de *repertorios de acción*, es válido señalar que se recurrió a múltiples formatos y que muchas veces los mismos se emplearon combinados en una misma acción de protesta. En general, podríamos subrayar el protagonismo de la huelga y la movilización. La primera predominó en diciembre y estuvo ausente en enero y febrero, y la segunda fue constante durante todos los meses revistiendo diferentes modalidades: con cacerolas, con caravanas de autos-tractores, con banderazos e, incluso, con enfrentamientos y disturbios.

Entre las *demandas*, resultaron recurrentes las consignas contra el ajuste (ya sea en materia de salud, educación, salarios, presupuestos municipales, entre otros) y en rechazo a la clase dirigente. Por su parte, la demanda por alimentos aparece expresada con mayor frecuencia, visibilidad y organicidad en Villa María durante enero, mientras que muestra una presencia más esporádica en diciembre en Río Cuarto. No obstante, en ambas ciudades, las fuentes enfatizaron el fuerte accionar de la iglesia y el municipio en el reparto de bolsones de alimentos como vía para contener los reclamos y evitar su radicalización.

Justamente esa intervención directa de actores mediadores ante la protesta social puede mostrarse como un rasgo particular del devenir de la conflictividad en localidades de tamaño intermedio como las que analizamos en este capítulo. Otra nota peculiar que, de alguna manera cuestiona la reconstrucción nacional-metropolitana de los sucesos del 2001, remite a que ciertamente las jornadas épicas del estallido social del 19 y 20 de diciembre no alcanzaron tal magnitud en ciudades como Río Cuarto y Villa María. Si bien en la primera se registraron diferentes acciones colectivas, no lograron total articulación ni un carácter fuertemente disruptivo; y en el segundo caso las fuentes relevadas no advierten acción colectiva alguna.

Resulta interesante y distintiva la performatividad, que seguramente nutrirá líneas futuras de trabajo, al vincularse con los impactos políticos de las protestas analizadas. Al respecto, cabe señalar que los recambios en los actores de gobierno se dieron solo a nivel del ejecutivo nacional; tanto la provincia de Córdoba, como las ciudades objeto de estudio, mantuvieron sus intendentes, gabinetes y ediles intactos. Aunque se percibió un clima de descontento generalizado con los representantes políticos locales; incluso algunos de ellos fueron receptores de escraches y de múltiples exigencias por reducción de dietas, renuncia, o toma de medidas concretas ante la crisis.

A su vez, cabe advertir que las reformas políticas que se implementaron en el contexto de la crisis de 2001, en ambas ciudades, resultaron bastante moderadas. Se privilegiaron algunos recortes en el funcionamiento de la maquinaria estatal y la reducción de los presupuestos de cara al 2002, pero sin cambios sustantivos en los modos de vinculación entre ciudadanía y política, o en el diseño e implementación de buena parte de las políticas públicas municipales.

Finalmente, enfatizamos la intención de este escrito, procurando revisitar, veinte años después, un ciclo crítico de la historia argentina reciente. Esa mirada se emprendió desde dos localidades de la pampa agrocordobesa, resaltando las acciones colectivas contenciosas desarrolladas y los actores que las protagonizaron. En esa senda, hemos tratado de dilucidar algunas notas peculiares y distintivas que no necesariamente coinciden con la reconstrucción nacional-metropolitana de los hechos.

Bibliografía

- Basconzuelo, C.; Quiroga, M.V.; Baggini, I.; Kenbel, C.; Brizzio, M. & Isidro, E. (2022). ¿Cómo estudiar las protestas en clave local? En: Basconzuelo, C.; Díaz Esteves, V. & Aravena Carrasco A. (Eds.), *¡A desalambrar! Resistencias, desigualdades e itinerarios posibles en sociedades latinoamericanas*. Chile: Ariadna Ediciones. Recuperado de: <https://ariadnaediciones.cl/images/pdf/desalambrar.pdf>
- Calderón Gutierrez, F. (2012) (coord.). *La protesta social en América Latina*. Argentina: Siglo XXI Editores.
- Carini, G. (2019). Convertibilidad, performatividad política y protesta agraria. De los consensos iniciales y sus límites en la pampa cordobesa (1991-2002). *Trabajo y Sociedad*, 33, 153-171. Recuperado de: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1514-68712019000200131
- Ciuffolini, M. A. (2008) (comp.). *En el llano todo quema: movimientos y luchas sociales urbanas y campesinas en la Córdoba de hoy*. Argentina: Editorial EDUCC.
- Delamata, G. (2002). De los «estallidos» provinciales a la generalización de las protestas en Argentina. Perspectiva y contexto en la significación de las nuevas protestas. *Nueva Sociedad*, 182, 121-138. Recuperado de: <https://nuso.org/articulo/de-los-estallidos-provinciales-a-la-generalizacion-de-las-protestas-en-argentina/>
- Di Stefano, R. & Sábato, H. (2002). *De las cofradías a las organizaciones de la sociedad civil*. Argentina: Gadis.
- Eder, K. (1991). Au-delà du sujet historique: vers une construction théorique des acteurs collectifs. *L'Homme et la société*, 1 (101), 121-140. Recuperado de: https://www.persee.fr/doc/homso_0018-4306_1991_num_101_3_2565
- Edwards, B. & McCarthy, J. (2004). Resources and social movement mobilization. En: D. Snow, S. Soule & H. Kriesi (eds.), *The Blackwell companion to social movements (pp. 116-154)*. United States of America: Blackwell Publishing.
- Garretón, M. A. (2001). Cambios sociales, actores y acción colectiva en América Latina. *CEPAL*, 56, 9-45. Recuperado de: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/6012/S0110833_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Giarracca, N. (2007). *Tiempos de rebelión: "Que se vayan todos": calles y plazas en la Argentina 2001-2002*. Argentina: Editorial Antropofagia. Recuperado de: <http://biblioteca.clacso.edu.ar/Argentina/iig-uba/20161104012802/Tiempos.pdf>
- Giarracca, N. (2017). Estudios rurales y movimientos sociales: miradas desde el Sur. *Antología esencial*. Argentina: CLACSO. Recuperado de: http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20171124030808/Antologia_esencial_Norma_Giarracca.pdf
- Giner, S., Lamo de Espinosa, E. & Torres, C. (1998) (eds.). *Diccionario de sociología*. España: Alianza Editorial.
- Gómez, M. & Massetti, A. (2009). *Los movimientos sociales dicen: conversaciones con dirigentes piqueteros*. Argentina: Nueva Trilce.
- Gordillo, M. (2010). *Piquetes y Cacerolas. El "argentino" del 2001*. Argentina: Sudamericana.
- Gordillo, M. (2012). *La protesta frente a las reformas neoliberales en la Córdoba de fin de siglo*. Argentina: Ed. Ferreyra.
- Guzmán-Miranda, O. & Caballero-Rodríguez, T. (2016). Naturaleza de los actores sociales. *Santiago*, (140), 514-526. Recuperado de: <https://santiago.uo.edu.cu/index.php/stgo/article/view/1737>
- Hurtado, E. (2019). La movilización del 2001 entre lo instituido y lo instituyente: de la nacionalización de las protestas al particularismo local de la ciudad de Río Cuarto. En: E. Cejas & A. Brunas (eds.), *La enseñanza de la historia entre viejos y nuevos paradigmas: el estudio de los movimientos sociales desde el siglo XX como procesos de construcción social de la realidad (pp. 1-25)*. Argentina: APEUN.

- Javaloy, F., Rodríguez, A. & Espelt, E. (2001). *Comportamiento colectivo y movimientos sociales*. España: Pearson Educación.
- Koopmans, R. (2004). Protest in time and space: the evolution of waves of contention. En: Snow, D.; Soule, S. & Kriesi, H. (edits.), *The Blackwell companion to social movements (pp. 19-46)*. United States of America: Blackwell Publishing
- Leoni, M. S. & Solís Carnicer, M. (2012) (comp.). *La política en los espacios subnacionales. Provincias y Territorios en el nordeste argentino (1880 -1955)*. Argentina: Prohistoria ediciones.
- McAdam, D., McCarthy J. & Zald, M. (1999). *Movimientos sociales: perspectivas comparadas*. España: Istmo.
- Neveu, E. (2002). *Sociología de los movimientos sociales*. España: Hacer Editorial.
- Offerlé, M. (2012). L'action collective patronale en France, 19-21 siècles: organisation, répertoires et engagements. Vingtième Siècle. *Revue d'histoire*, 14, 83-97. Recuperado de: <https://es.booksc.org/book/51057214/75d98a>
- Pereyra S., Pérez G. J. & Schuster F. (2010). *La huella piquetera. Avatares de las organizaciones de desocupados después de 2001*. Argentina: Editorial Al Margen.
- Pérez, G. (2010). Genealogía del quilombo: una exploración profana sobre algunos significados del 2001. En: S. Pereyra (ed.), *La huella piquetera (pp. 29-34)*. Argentina: Ediciones al Margen.
- Pucciarelli, A. & Castellani, A. (2014). *Los años de la Alianza. La crisis del orden neoliberal*. Argentina: Editorial Siglo XXI.
- Quiroga M. V. & Magrini, A. L. (2020). Protestas sociales y cuestión social en América Latina contemporánea. *Revista Temas Sociológicos*, 27, 275-308. Recuperado de: <http://ediciones.ucsh.cl/index.php/TSUCSH/article/view/2425>
- Quiroga, M. V. & Baggini, I. (2020). El ciclo de protestas 2001-2002 en clave local. Revisitando el período desde la ciudad de Río Cuarto. *RAIGAL*, 6, 68-81. Recuperado de: <https://raigal.unvm.edu.ar/ojs/index.php/raigal/article/view/357>
- Reynoso, C. (2019). *Movimiento de autoconvocados en la ciudad de Río Cuarto 1989-2002. Un estudio exploratorio de su génesis y dinámica*. (Tesis de Maestría). Río Cuarto, Argentina: Facultad de Ciencias Humanas. Universidad Nacional de Río Cuarto.
- Schuster, F. (2005). Las protestas sociales y el estudio de la acción colectiva. En: F. Schuster, F.; F. Naishtat; G. Nardacchione & S. Pereyra (comps.), *Tomar la palabra. Estudios sobre protesta social y acción colectiva en la Argentina contemporánea (pp. 43-83)*. Argentina: IIGG. UBA.
- Scribano, A. (2003). *Reflexiones sobre una estrategia metodológica para el análisis de las protestas sociales*. *Sociologías*, 5 (9), 64-104. Recuperado de: <https://seer.ufrgs.br/sociologias/article/view/5870>
- Scribano, A. & Schuster, F. (2001). Protesta social en la Argentina de 2001: entre la normalidad y la ruptura. *Observatorio Social de América Latina*, 5, 17-22. Recuperado de: https://www.sociedad-estado.com.ar/wp-content/uploads/2014/10/Scribano_Schuster_Protesta_Social.pdf
- Svampa, M. (2011). Argentina, una década después. Del "que se vayan todos" a la exacerbación de lo nacional-popular. *Nueva Sociedad*. 235, 17-34. Recuperado de: <http://www.maristellasvampa.net/archivos/ensayo55.pdf>
- Tamayo, S. (2016). *Espacios y repertorios de la protesta*. México: Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco.
- Tarrow, S. (1997). *El poder en movimiento: los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*. España: Alianza.
- Tarrow, S. (1991). Ciclos de acción colectiva: entre los momentos de locura y el repertorio de contestación. En: M. Traugott (comp.), *Protesta social. Repertorios y ciclos de la acción colectiva (pp. 99-130)*. España: Hacer editorial.

Tarrow, S. (1999). Estado y oportunidades: la estructuración política de los movimientos sociales. En: D. McAdam, J. McCarthy & M. Zald (eds.), *Movimientos sociales, perspectivas comparadas. Oportunidades políticas, estructuras de movilización y marcos interpretativos culturales* (pp. 71-99). España: Istmo.

Tilly, Ch. (1978). *From Mobilization to Revolution*. United States of America: Random House.

Tilly, Ch. (1986). *The Contentious French*. United States of America: Harvard University Press.

Fuentes

Fuente hemerográfica:

Ediciones registradas del periódico Puntal (Río Cuarto) sobre protesta: 13/12/2001; 18/12/2001; 19/12/2001; 20/12/2001; 21/12/2001; 15/01/2002; 16/01/2002; 17/01/2002; 18/01/2002; 25/01/2002; 26/01/2002; 29/01/2002; 2/02/2002; 15/02/2002; 18,19 y 29/02/2002; 22 y 23/02/2002.

Ediciones registradas del periódico El Diario del Sur de Córdoba (Villa María) sobre protesta: 8/12/2001; 10/12/2001; 11/12/2001; 12, 13 y 14/12/2001; 20 y 21/12/2001; 9/01/2002; 10/01/2002; 15/01/2002; 17/01/2002; 18/01/2002; 19/01/2002; 23/01/2002; 24/01/2002; 25/01/2002; 31/01/2002; 2/02/2002; 7/02/2002; 16/02/2002; 20/02/2002; 23/02/2002.

Fuente estadística:

INDEC. Censo Nacional de Población, Hogar y Vivienda. Año 2001.

Sobre los autores

María Virginia Quiroga

mviriniaq@yahoo.com.ar

Dra. en Estudios Sociales de América Latina. Universidad Nacional de Río Cuarto. Instituto de Investigaciones Sociales, Territoriales y Educativas (ISTE - CONICET/UNRC).

Celia Basconzuelo

cbasconzuelo2003@yahoo.com.ar

Dra. en Historia. Universidad Nacional de Río Cuarto. Instituto de Investigaciones Sociales, Territoriales y Educativas (ISTE - CONICET/UNRC).

Iván Baggini

ivanbaggini@gmail.com

Dr. de Investigación en Ciencias Sociales con mención en Sociología. Universidad Nacional de Río Cuarto. Instituto de Investigaciones Sociales, Territoriales y Educativas (ISTE - CONICET/UNRC)

Capítulo 4: Os sentidos das escalas geográficas para as Ações Coletivas

Agripino Souza Coelho Neto

Resumo

O objetivo precípua deste texto é organizar uma reflexão sobre os sentidos que as escalas geográficas têm para as ações coletivas. As ações coletivas correspondem a um conjunto de práticas socioespaciais que envolvem simultânea e reciprocamente determinado número de indivíduos ou grupos, articulados por objetivos aproximados e compartilhados, de modo a conferir sentidos reconhecidos em seus propósitos e nas suas ações. Determinadas modalidades de ações coletivas (associações de bairro, de associações comunitárias rurais e/ou de produção e em cooperativas (populares) rurais de produção) operam e (se) articulam (em) diferentes escalas, portanto, assumem distintos conteúdos nas diferentes escalas geográficas, pois em cada escala, elas constroem pertinências e são portadoras de significados particulares. Na escala local as ações coletivas desempenham um papel decisivo na construção de solidariedades comunitárias, viabilizando a constituição de solidariedades locais e imediatas, tecidas através da coexistência no mesmo espaço vivido. Na escala regional, as ações coletivas são produtoras de horizontalidades socioespaciais, caracterizadas como um tecido socioespacial conformado por relações de proximidade, de vizinhança, de um acontecer homólogo, ativado por relações de cooperação e reciprocidade que articulam sujeitos individuais e coletivos, e aproximam os lugares, por meio do estabelecimento de alianças e o compartilhando de soluções/alternativas de vida. As ações coletivas, mesmo aquelas que têm uma base local de sustentação, constroem relações com outras escalas geográficas, acionando organizações sociais e recursos localizados em diferentes países.

Palavras chave: ações coletivas; escalas geográficas; solidariedades comunitárias; horizontalidades socioespaciais

Os sentidos das escalas geográficas para as Ações Coletivas

Agripino Souza Coelho Neto

Considerações exordiais

As reflexões elaboradas neste texto encontram inspiração nas atividades desenvolvidas no âmbito dos grupos de pesquisa TECEMOS (Território, Cultura e Ações Coletivas) e TERRITÓRIOS (Território, Rede e Ação Política), isto é, nos projetos de pesquisa, nas discussões de textos e nas orientações de projetos de iniciação científica, de monografia de graduação e de dissertações de mestrado. Elas se derivam e se desdobram também de dois projetos de pesquisa: (i) “Ação Coletiva e Territorialidade: decifrando o comportamento socioespacial das associações comunitárias rurais no Espaço Sisaleiro da Bahia e (ii) “Redes e Territorialidade no Espaço Sisaleiro da Bahia”. Alimentamo-nos também das diversas atividades e discussões desenvolvidas no âmbito da rede interdisciplinar e internacional de estudos sobre ações coletivas na América Latina, envolvendo universidades e pesquisadores do Brasil, da Argentina, da Colômbia e do Chile.

As ações coletivas correspondem a um conjunto de práticas socioespaciais que envolvem simultânea e reciprocamente determinado número de indivíduos ou grupos, articulados por objetivos aproximados e compartilhados, de modo a conferir sentidos reconhecidos em seus propósitos e nas suas ações.

Nossa reflexão encontra inspiração e amparo empírico (predominantemente) nas experiências de associações de bairro, de associações comunitárias rurais e/ou de produção e em cooperativas (populares) rurais de produção, que operam no Território do Sisal, localizado no nordeste do estado da Bahia (Brasil).

Essas modalidades de ações coletivas operam e (se) articulam (em) diferentes escalas, portanto, assumem distintos conteúdos nas diferentes escalas geográficas, pois em cada escala, elas constroem pertinências e são portadoras de significados particulares.

O objetivo precípua deste texto é organizar uma reflexão sobre os sentidos que as escalas geográficas têm para as ações coletivas. Apoiamo-nos na ideia de uma dialética socioespacial, considerando que processos sociais produzem escalas e as escalas afetam a operação dos processos sociais. Nesta perspectiva as escalas não estão ontologicamente dadas como um a priori à espera de serem descobertas, mas são construções que expressam a estruturação dos processos sociais. Assim, trata-se de processos que implicam em práticas socioespaciais, envolvendo a construção, a apropriação e a manipulação das escalas geográficas.

O texto está estruturado em quatro movimentos nucleares, além das considerações introdutórias e finais. O primeiro movimento se ocupa do debate sobre a escala, demarcando uma base conceitual necessária para compreensão dos fenômenos das ações coletivas pelo ângulo particular escolhido por esta reflexão, isto é, acionando uma abordagem escalar.

Na seção seguinte, busca-se revelar a importância das ações coletivas que se estruturam e atuam na escala local na construção de solidariedades comunitárias. Em seguida, centramos esforços para desvelar o papel das ações coletivas que operam e se articulam na escala regional na produção de horizontalidades socioespaciais. Por fim, dedicamo-nos a pensar como as ações coletivas de base local constroem articulações na escala nacional e global.

Escala: perspectivas para pensar as ações coletivas

Segundo Lévy (2019), a noção de escala não é específica das ciências sociais que tomam o espaço como objeto de investigação. Também não é própria das ciências espaciais em geral. No entanto, sem discordar do autor, não podemos deixar de admitir que, em grande medida, a identidade da ciência geográfica – e até mesmo a imagem que permeia em outros campos científicos e se presentifica também no cotidiano popular – pode ser representada pela figura de um mapa. Neste universo simbólico, ser geógrafo pressupõe, marcadamente, a habilidade de fazer ou manipular mapas. A produção e o manuseio de mapas -inclusive, sua interpretação- exige encarar o complexo e denso debate sobre escala. Os geógrafos convivem recorrentemente com o debate que opõe a escala cartográfica à escala geográfica. No entanto, este debate nem sempre esteve colocado nestes termos.

Orain (2006:2) observou na geografia um processo de reflexão sistemática, iniciado nos anos 1950 e aprofundado nos anos 1970, que representou um ponto de inflexão no debate sobre a escala, cujo entendimento ultrapassou o status de ferramenta técnica secundária para se tornar uma componente de reflexão teórica. Desse modo, a escala “[...] est devenue bien plus qu’un instrument « scopique » (comme le microscope ou le télescope), dont on peut faire varier la focale pour scruter des ensembles plus ou moins vastes. Elle renvoie à des niveaux de réalité différents, plus ou moins autonomes, plus ou moins interdépendants.

Até a década de 1950, a palavra escala “[...] avait une fonction strictement instrumentale : il servait à préciser le niveau de réduction opéré par une carte” (Orain, 2006:2). Esta é uma interpretação reforçada por Robic (2004:1), advogando que “[d]ans la géographie française de la fin du XIXe siècle, et sous réserve d’inventaire, le terme d’échelle semble réservé à la cartographie”. Neste sentido, os autores fazem referência a clássica escala cartográfica, que expressa uma relação matemática entre as dimensões de um objeto no mundo real – um continente, um país, uma província, uma cidade – e as dimensões traçadas em um mapa, representando o mesmo objeto (ou diversos objetos contidos no espaço). Em síntese, a escala cartográfica expressa a relação entre o mapa e a Terra. Esta relação pode ser expressa na forma de uma fração, cujo denominador representa a distância no terreno e o numerador sua equivalência no mapa (escala numérica) ou pode ser expressa por uma proporcionalidade por meio de uma barra numerada (escala gráfica). Os mapas representam o mundo, reduzindo o tamanho e a diversidade de seus espaços componentes para exibição visual, digital ou em papel (Marston, Woodard & Jones, 2009).

A partir da década de 1950, com a publicação de Jean Tricart (1952 : 213), "La géomorphologie et la notion d'échelle", verifica-se “[...] un mouvement d’enrichissement du contenu du terme : l’échelle n’est plus seulement un simple rapport, elle désigne un niveau d’observation pertinent” (Orain, 2006:2). Todavia, admite o autor, que apenas a partir da década de 1970, o incômodo em torno da ambiguidade do significado da palavra, fomenta o debate e a “[...] distinctions serrées entre ‘échelles’ et ‘ordres de grandeur’ ou ‘niveaux d’observations’”.

Esse debate encontrou terreno fértil na clássica obra de Lacoste (2005) “La géographie, çasert d’abord à fairelaguerre”, publicada originalmente em 1976, discutindo as diferentes ordens de grandeza e os diferentes níveis da análise espacial. Para o autor, a mudança de escala transforma a problemática estabelecida pelo pesquisador e os raciocínios geográficos que se possam formar a parte deste recorte espacial.

Após essa longa reflexão sobre esse delicado problema das escalas, dos níveis de análise e dos espaços de conceituação, pode-se notar até que ponto as observações e os raciocínios geográficos são função da medida do espaço levado em consideração e critérios de escolha (Lacoste, 2005: 83).

Lévy (2009:308) advoga a ideia de que o tamanho afeta o conteúdo. Segundo o autor, “[...] dans une perspective nom positiviste, que, en prétendant se contenter de faire varier la taille d’un phénomène, on en modifie en réalite les autres aspects”.

Verifica-se nas últimas duas décadas, uma intensificação da reflexão e teorização sobre a escala, gerando das pesquisas mais produtivas e inovadoras, especialmente na geografia humana anglo-saxônica. Há avanços importantes que reconhecem a natureza inerentemente política da produção de escala, apontando a necessidade de considerar as formações estatais e os diversificados movimentos de resistência que tanto implantam quanto constroem escalas (Marston, Woodard& Jones, 2009).

Segundo Lévy (2019:309), a escala é uma das características básicas da relação entre as realidades geográficas, consideradas conjuntamente com as métricas e a substância. Para operar analiticamente com a dimensão espacial das sociedades, o tamanho importa porque reflete o impacto da distância. Nestesentido, “um saut d’échelle peur être appréhendé comme basculement d’un espace du statut de lieu à celui d’aire, ou inversemente, c’est-à-dire d’un espace donr les composantes sont ou non sé parées par de la distance”.

Para fins operacionais e para pensar a escala geográfica, Souza (2013:208-210) identifica quatros níveis escalares: local, regional, nacional e internacional. A escala local equivale ao espaço de vivência mais intensa do espaço e das relações com a municipalidade. Trata-se de recortes espaciais que se apresentam como espaços possíveis de serem experienciados diretamente e intensamente no quotidiano, como a cidade, o quarteirão e o bairro. A escala regional (e a região) “constitui a moldura imediata do nível local [...]”. Este nível escalar pode coincidir “[...] com um território político-administrativo formal e com unidade de governo estatal (estado, província etc.), ou pelo menos com um espaço de implementação de políticas públicas”, que a literatura chama de região plano”. A compreensão mais geral e usual da escala regional equivale ao nível situado entre a escala local e a escala nacional. Esta última equivale a “escala do país”, “aquela do território ocupado por um Estado formalmente soberano”. A escala internacional se estrutura em dois níveis: a escala de grupo de países, que “consiste em um agregado de dois ou mais países, agrupados segundo critérios os mais diversos” e a escala global, equivalendo “[...] a fenômenos de ordem econômica no âmbito do sistema mundial capitalista (globalização econômico-financeira)” (Souza, 2013:213). Estes são os casos das áreas de abrangência de uma entidade mundiais, como a ONU, a FIFA, o FMI e o Banco Mundial ou de ações coletivas que operam e se articulam em escala planetária, como o Greenpeace.

Distinguindo da escala cartográfica, Castro (1995: 134) faz alusão a escala geográfica que amplia as possibilidades de compreensão do real:

O significado mais usual, e mais simples, de escala é o de medida de representação gráfica (com redução ou ampliação) de área. Esta simplicidade matemática esconde a enorme complexidade do termo quando se trata de recortar a realidade espacial. Este recorte supõe, consciente ou inconscientemente, uma concepção que informa uma percepção do espaço total e do

‘fragmento’ escolhido. Em outras palavras, ‘a utilização de uma escala exprime uma intenção deliberada do sujeito de observar seu objeto’.

Neste sentido, a escala equivale a uma ação deliberada do pesquisador de estudar/delimitar seu objeto de investigação. Essa é uma perspectiva que concebe a escala exclusivamente como um construto epistemológico (Moore, 2008) ou como um ‘tropo representacional’, nos termos de Jones (1998).

Essa assertiva implica no debate sobre o estatuto ontológico da escala, inscrito no embate entre uma perspectiva materialista e outra idealista. Esta oposição binária se expressa na indagação fundamental elaborada por Souza (2013:182): “existiriam de fato as escalas, no mundo real, ou seriam elas meramente artifícios intelectuais de que lançamos mão para compreender a realidade?” Essas perspectivas expõem posições antagônicas que definem: por um lado, a escala como um fato, um objeto do mundo real-concreto, podendo implicar em uma postura de reificação/coisificação da escala; e por outro lado, a escala como artifício intelectual, analítico, podendo ser considerado meramente como expedientes mentais e fortemente subjetivos.

Uma saída para esta encruzilhada epistemológica é pensar na perspectiva colocada por Moore (2008: 207), distinguindo a escala como categoria de análise e a escala como categoria da prática, sendo as primeiras “experience distantc ategories used by social scientists” e as últimas “categories of everyday experience, developed and deployed by ordinary social actors”. Ou seja, a escala como construto epistemológico e a escala como entidade socioespacial material.

Na mesma direção, Souza (2013:181-182) também apresenta uma proposição conceitual operacional, distinguindo uma escala do fenômeno, uma escala de análise e uma escala de ação. A escala do fenômeno equivale a abrangência física no mundo de um objeto real, isto é, sua área de ocorrência, podendo ser “a extensão de um rio ou de uma cadeia montanhosa, ao tamanho de um país, cidade ou província”. A escala de análise é aquela “intelectualmente construída como um nível analítico [...] capaz de nos facultar a apreensão de características relevantes” de algum objeto investigado, a partir de um problema formulado. A escala de ação, por sua vez, trata-se de “um tipo de escala que se refere a determinados fenômenos sociais, concernentes a ações (em geral coletivas) e ao papel de agentes/sujeitos”. Essa é uma perspectiva promissora para pensar a organização e operação das mais variadas modalidades de ações coletivas, objeto da reflexão deste texto.

O debate sobre escala incorporou crescente complexidade, apontando perspectivas de grande interesse para os encaminhamentos das reflexões deste texto, a exemplo da construção social da escala ou da política de escalas (Swyngedouw, 1997; Marston, 2000; Brandão 2010; González, 2010). Essa é uma perspectiva que advogamos outrora:

A concepção de escalas, como construções sociais conflitivas, processuais e dinâmicas que expressam relações de poder, nos sugere, inapelavelmente, dirigir nossa atenção para as ações dos sujeitos sociais, identificando seus interesses e aspirações, e buscando compreender suas ações, estratégias, políticas e discursos (Coelho Neto, 2018:42).

Assumindo essa perspectiva, asseveramos que as escalas não estão ontologicamente dadas como um a priori à espera de serem descobertas, mas são construções que expressam a organização dos processos sociais (González, 2010). Processos que implicam em práticas socioespaciais, envolvendo a construção, a apropriação e a manipulação das escalas geográficas.

González (2010:125-126) define as “políticas de escala” como “[...] el campo en el que tenen lugar las luchas materiales y discursivas entre diferentes actores por establecer configuraciones escalares hegemónicas”. É desse modo que “en esta lucha los actores utilizan ‘narrativas escalares’ para justificar y ‘dar empaque’ a sus argumentos” Essa foi uma estratégia constatada por Coelho

Neto (2021), identificando a organização social e política de sindicatos, associações e cooperativas de agricultores no Território do Sisal (Bahia-Brasil), articulando-se em diferentes escalas e construindo suas estratégias multiescalares.

Ações coletivas e escala local: a construção de solidariedades comunitárias

Manter serviços próprios de assistência médica, dentária, recreativa, educacional e jurídica, constituindo-se, neste particular em mandatária dos associados no que diz respeito à ecologia, ao meio ambiente, a defesa do consumidor, ou com este mesmo objetivo, celebrar convênios com qualquer entidade pública ou privada (Artigo 5º do Estatuto Social da Associação de Desenvolvimento Comunitário do Cedro, município de Barrocas, Bahia).

A partir de 2009, a gente começou a pleitear a venda dos produtos familiares para alimentação escolar do município e do estado [...]. Isso tudo começou na minha comunidade, que é na Comunidade do Miranda, na Associação do Miranda [Associação dos Moradores e Pequenos Produtores do Povoado de Miranda]. Foi a primeira a tentar o processo de comercialização no município. Eu era o presidente na época e nós fomos o pioneiro em fazer esse processo de habilitação da entidade para entrar nessa política. E hoje já chega a mais de 15 comunidades no município [...], produzindo produtos diversificados, desde os derivados da mandioca, do milho, a polpa de frutas e que gera emprego. (Ex-Presidente da Associação dos Moradores e Pequenos Produtores do Povoado de Miranda-Santaluz/Bahia).

Os dois depoimentos que inauguram esta seção indicam duas faces daquilo que estamos chamando de solidariedades comunitárias: (i) a busca de soluções para enfrentamento de problemas comuns que afligem os lugares de vida dos sujeitos sociais organizados como ações coletivas, e (ii) a busca de alternativas econômico-produtivas para assegurar suas condições materiais de sobrevivência. Trata-se de dois propósitos diferentes que fundam experiências distintas – mas muitas vezes imbricadas – de ações coletivas que se estruturam e se organizam na escala local.

Desse modo, advogamos que, na escala local, as ações coletivas desempenham um papel decisivo na construção de solidariedades comunitárias, pois, as associações de agricultores rurais, as associações de moradores de bairros urbanos, os sindicatos de trabalhadores rurais e as cooperativas populares de agricultores viabilizam a constituição de solidariedades locais e imediatas, tecidas pela coexistência no mesmo espaço vivido (o bairro, o povoado¹, o assentamento rural ou a fazenda), ou seja, na busca coletiva de alternativas para enfrentamento dos problemas comuns, próprios do compartilhamento à mesma realidade socioespacial.

As solidariedades comunitárias equivalem aos esforços empreendidos pelas ações coletivas que, dialeticamente, se amparam em relações comunitárias e reforçam o sentido de comunidade nos indivíduos e grupos sociais envolvidos. Essas ações envolvem relações de vizinhança, mutualidade e agir coletivo. Pressupõe o compartilhamento da mesma realidade socioespacial, cujos problemas se tornam comuns aos membros da comunidade e os mobilizam e os alavancam a unir esforços para seu enfrentamento.

¹ Povoado “é o aglomerado rural isolado que corresponde a aglomerados sem caráter privado ou empresarial, ou seja, não vinculados a um único proprietário do solo (empresa agrícola, indústrias, usinas, etc.), cujos moradores exercem atividades econômicas, quer primárias (extrativismo vegetal, animal e mineral; e atividades agropecuárias), terciárias (equipamentos e serviços), ou, mesmo, secundárias (industriais em geral), no próprio aglomerado ou fora dele” (IBGE, 2000: 227).

A coexistência nos mesmos lugares molda um modo de vida, ativa e viabiliza práticas sociais que se fortalecem com a proximidade geográfica e social, permitindo, por exemplo, a conformação de relações comunitárias, de conhecimento mútuo e de identificação, enfim, permitem a construção de relações comunitárias.

Tönnies (1973, 1995) concebe uma comunidade a partir dos laços de sangue (a exemplo da família e do parentesco), das relações de vizinhança marcadas pela proximidade espacial (estabelecendo a comunidade de lugar), e pela afinidade espiritual (comunidade de espírito).

A comunidade de sangue acha-se regularmente ligada às relações e participações comuns, quer dizer, à posse comum dos próprios seres humanos. Na comunidade de lugar, as relações vinculam-se ao solo e à terra; e, na comunidade de espírito, os elos comuns com os lugares sagrados e com as divindades honradas. As três espécies de comunidades estão estreitamente ligadas entre si no espaço e no tempo, e, em consequência, em cada um de seus fenômenos particulares e seu desenvolvimento, como na cultura humana em geral e sua história (Tönnies, 1995:252).

O referente espacial como componente constitutivo do conceito de comunidade é fortemente explicitado pelo autor, pois as relações com o espaço (tornado lugar) é evocado como componente constitutivo da comunidade. Em pequenas comunidades rurais do estado da Bahia, além das relações de vizinhança, as pessoas têm relações de parentesco e estabelecem fortes vínculos com a terra, isto é, com seus lugares de vida.

Maciver & Page (1973) definem dois componentes para pensar o conceito de comunidade: i) localidade, que consiste na ocupação do mesmo espaço, permitindo aos sujeitos sociais extraírem das condições de localização os laços de solidariedade; ii) o sentimento de comunidade, sustentado pela existência de uma coesão social e de coparticipação.

Peruzzo (2002:279) reúne os principais conteúdos das contribuições clássicas e apresenta as condições básicas que pressupõem a existência de uma comunidade:

- a) um processo de vida em comum através de relacionamentos e interação intensos entre os seus membros;
- b) auto-suficiência (as relações sociais podem ser satisfeitas dentro da comunidade);
- c) cultura comum;
- d) objetivos comuns;
- e) identidade natural e espontânea entre os interesses de seus membros;
- f) consciência de suas singularidades identificativas;
- g) sentimento de pertencimento;
- h) participação ativa de seus membros na vida da comunidade;
- i) locus territorial específico;
- j) linguagem comum.

A dimensão espacial, portanto, também é acionada pelos autores, pois a comunidade seria, nesta perspectiva, o compartilhamento “[...] tanto de um modo de vida em comum quanto de terra comum” (Maciver & Page, 1973:124). Desse modo, a convivência (no sentido de viver com o outro) no mesmo lugar alimenta o movimento de partilha e constrói o sentido de comunidade.

Objetivando o enfrentamento das dificuldades socioespaciais vivenciadas nos lugares de vida, os agricultores que vivem em povoados ou os moradores de bairros periféricos das cidades grandes e médias brasileiras, têm instituído modalidades de ações coletivas, materializadas nas formas de associações comunitárias e/ou de produção.

Sabourin (2009:88) nos lembrou que as associações constituem no “[...] modelo de organização local dos agricultores que mais se desenvolveu durante os últimos trinta anos”. Essas organizações, que atuam como redes, formadas por agricultores ou moradores das cidades têm sua base espacial de organização e atuação predominantemente nos povoados, assentamentos rurais e nos bairros periféricos das cidades.

Essas formas associativas carregam a presença do topônimo do lugar de origem para denominar a entidade, revelando a força do espaço/lugar como referência para suas identificações.

Com este expediente elas informam e comunicam ao mundo de que lugares elas são, isto é, seus lugares de pertencimento e enraizamento. O lugar em evidência é na ampla maioria das vezes um povoado, um assentamento rural ou um bairro periférico da cidade (Coelho Neto 2019, 2021).

No caso dos agricultores/moradores de pequenas povoações rurais, observa-se outra estratégia espacial que consiste na articulação de povoados para formar associações comunitárias e/ou de produção. Neste sentido, pessoas e lugares se articulam para dar vida a ações coletivas que conectam lugares marcados pela proximidade geográfica e social, compartilhando problemas comuns e buscando alternativas que emergem do agir coletivo e da potência que esta estratégia viabiliza. Coelho Neto (2019, 2021) demonstrou esta forte articulação no rural semiárido da Bahia, em especial no Território do Sisal. Agricultores de povoados distintos, mas com forte proximidade geográfica se uniam para criação de associações, resultando na formação de redes locais, tessituras do acontecer social e geograficamente próximo. A proximidade não se resume a distância cartesiana, mas da comunhão de contextos temporais e espaciais.

Coelho Neto (2021:241) destacou a força do lugar e da ideia de comunidade para as associações, que passam a estabelecer relações tipicamente comunitárias.

A outra referência marcante se refere à presença da palavra comunitária, que pretende expressar a natureza das associações. A junção das ideias de povoação rural como espaço de referência das associações e de comunidade como uma substância que lhe são intrínsecas, indicam os conteúdos que nos permitem capturar alguns dos sentidos que as associações podem assumir na escala local: como espaço das solidariedades típicas das relações comunitárias.

As solidariedades comunitárias se fundam na busca de soluções para enfrentamento de problemas comuns que afligem os lugares de vida, assim como na procura de alternativas econômico-produtivas para assegurar as condições materiais de sobrevivência.

Esses problemas referem-se predominantemente à carência de equipamentos e serviços de infraestrutura básica familiar, equipamentos e serviços de infraestrutura comunitária e equipamentos e serviços para organização de atividades produtivas. Trata-se de infraestruturas fundamentais que conferem aos lugares condições dignas de vida, sobretudo quando estamos focalizando povoados e bairros periféricos no Nordeste brasileiro.

Os problemas comuns são vivenciados e compartilhados em decorrência da coexistência no mesmo espaço vivido, pois o compartilhamento de uma mesma realidade socioespacial oferece os conteúdos para construção de alternativas conjuntas.

Os laços de reciprocidade se manifestam na criação de associações de agricultores, de natureza comunitária e/ou produtiva, com as quais se busca construir coletivamente alternativas para enfrentamento de seus problemas. Trata-se da constituição de solidariedades locais e imediatas que objetivam o atendimento de carências básicas de serviços e infraestrutura, deixadas pelas lacunas de atuação do Estado (aqui especialmente na esfera municipal). [...] o volume de benefícios voltados para suprimento de carências de infraestrutura básica, seja de natureza familiar, seja de natureza coletiva/comunitária (água encanada; construção, reforma e ampliação de casas; utensílios para casa; energia elétrica; cestas básicas etc.). (Coelho Neto, 2021:244-245).

No caso do semiárido brasileiro, parte significativa dos benefícios está voltada para a convivência com as condições naturais. Neste sentido, as associações comunitárias buscam obter e construir cisternas, barragens, aguadas e perfuração de poços artesianos, indicando esforços de criação de mecanismos de armazenamento de água e de convivência com a seca.

No que se refere às associações urbanas, inscritas nos bairros periféricos das cidades, Santos (2021:119) identificou as atividades desenvolvidas por quatro associações de bairro na cidade de Serrinha (Bahia, Brasil). As associações desempenham um papel demarcadamente político,

identificando e organizando “as demandas do bairro e encaminhar para o poder público”. Neste sentido, eles reivindicam iluminação pública, calçamento das ruas, limpeza das ruas, esgotamento sanitário, posto de saúde, enfim, um conjunto de infraestruturas e serviços básicos fundamentais para viver com dignidade nos seus lugares de vida.

Outro foco da atuação das associações urbanas é a promoção de atividades para envolver a população dos bairros, com a organização de festejos em datas comemorativas e jogos recreativos (Santos, 2021). Estas ações conformam as tessituras do viver coletivo, contribuindo para os processos de socialização e para gestação de solidariedades comunitárias.

Por outro lado, os esforços para criação de associações objetivam também encontrar e construir alternativas de sobrevivência, buscando compor parcerias para viabilização de projetos produtivos, como, construção de casas de farinha comunitárias, produção artesanal com matéria-prima típicas do contexto regional, produção de polpa de frutas regionais, distribuição de sementes, criação de pequenos animais e empréstimo de equipamentos agrícolas. Também integram o universo de ações das associações, a oferta de cursos de capacitação, geralmente dirigidos para capacitação técnica, elaboração de projetos produtivos, assim como para o desenvolvimento de atividades de produção e comercialização de mercadorias (Coelho Neto, 2019, 2021).

É importante pensar que as ações coletivas na escala local não são reflexos do que acontecem em outras escalas. Elas tem uma ancoragem e enraizamento locais, mas também desenvolvem ações protagônicas nas relações que estabelecem com outras escalas geográficas. As ações coletivas não estão isoladas dos contextos regional e nacional, mas acionam outras escalas para fazer valer seus propósitos.

Ações coletivas e escala regional: a produção de horizontalidades socioespaciais

Nós tentamos e discutimos sobre a questão de ter uma entidade regional que representasse o movimento sindical e pudesse tá mais próximo do movimento sindical. Porque as federações e as confederações, as confederações lá em Brasília, a federação em Salvador é distante e não tinha como agente estar fazendo um debate e encaminhando as propostas e para se tornar em ações de desenvolvimento para o movimento sindical, para as agricultoras e agricultores familiares (Ex-Presidente da Fatres - Fundação de Apoio aos Trabalhadores Rurais e Agricultores Familiares da Região do Sisal e Semiárido da Bahia).

Aí começa a se agrupar e a fortalecer, até que em 2002 surge a ideia de se formalizar uma instituição regionalizada que tivesse caráter de poder e discutir diretamente com a união as propostas de desenvolvimento dessa região. É aonde nasce o Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável da Região Sisaleira. O Codes do Sisal não é política de governo, ela é uma política da necessidade da população sisaleira (Ex-Presidente do Codes-Sisal - Conselho Regional de Desenvolvimento Rural Sustentável da Região Sisaleira do Estado da Bahia).

Os dois depoimentos arrolados no preâmbulo desta seção não deixam dúvidas sobre a natureza escalar dos movimentos empreendidos pelas duas modalidades de ações coletivas que atuam no Território do Sisal (Bahia, Brasil). As ações da central sindical Fatres (Fundação de Apoio aos Trabalhadores Rurais e Agricultores Familiares da Região do Sisal e Semiárido da Bahia) e da organização social regional Codes-Sisal (Conselho Regional de Desenvolvimento Rural Sustentável da Região Sisaleira do Estado da Bahia), refletem importância estratégica da montagem de organizações-rede estruturada na escala regional, como possibilidade de apresentar respostas mais efetivas para as demandas do contexto geográfico na qual operam.

Defendemos a tese de que, na escala regional, as ações coletivas são produtoras de horizontalidades socioespaciais, caracterizadas como um tecido socioespacial conformado por

relações de proximidade, de vizinhança, de um acontecer homólogo, ativado por relações de cooperação e reciprocidade que articulam sujeitos individuais e coletivos, e aproximam os lugares, por meio do estabelecimento de alianças e o compartilhando de soluções/alternativas de vida. Estamos concebendo horizontalidades socioespaciais como um

conjunto de relações ativadas pelas redes de organizações sociais, aproximando realidades, possibilitando o diálogo, estabelecendo alianças, compartilhando soluções/alternativas de vida e construindo solidariedades que conectam os lugares e formam uma teia de relações socioespaciais (sem necessariamente formar continuidades). Empiricamente as horizontalidades socioespaciais se manifestam através da criação das alianças, parcerias e articulações na escala regional, tendo como base de sustentação as relações comunitárias e as solidariedades que se constroem na escala local (Coelho Neto, 2021:280).

Um aspecto fundamental para compreensão da produção de horizontalidades socioespaciais é a construção das solidariedades comunitárias. Nesta perspectiva, a criação organizações sociais respondem às estratégias que se configuram por meio de alianças, parcerias, coalizações e articulações formando ações coletivas que se fundam e atuam na escala regional, mas, cuja base de sustentação estão nas organizações sociais (ações coletivas) de base local.

A criação da central sindical Fatres depende da articulação dos sindicatos de trabalhadores rurais que se estruturam nos municípios e se apoiam nas ações sindicais nos povoados. Há centrais de cooperativas, isto é, cooperativas regionais que são formas de ações coletivas fundadas pelas cooperativas situadas nos povoados. Essas organizações-rede regionais asseguram sua existência, se sustentam e se fortalecem pelas bases comunitárias localmente construídas.

A Fatres consiste em uma modalidade de ação coletiva, formada pela articulação de 16 Sindicatos de Trabalhadores Rurais de municípios do Território do Sisal, configurando como um ator coletivo que se estrutura e atua na escala regional. A articulação dos sindicatos, formando a Fatres realiza “um movimento de extroversão territorial, ampliando seu alcance espacial e potencializando o efeito político de suas ações” (Coelho Neto, 2021:266). Esta estratégia escalar das organizações sindicais fora preconizada por Engels, como expressado nas palavras de Swyngedouw (2010:57):

Engels ha sugerido la forma en que el poder del movimiento laboral, por ejemplo, depende de la escala en la cual opere, y los organizadores del trabajo siempre han combinado estrategias para controlar lugares y construir alianzas territoriales que se extienden por un determinado espacio.

Conforme afirmamos em outro texto (Coelho Neto, 2021:266), “a criação da Fatres significa uma irrupção nos formatos tradicionais das redes de sindicalismo, que costumam seguir rigorosamente as escalas de governo”, ou escalas de regulação como se denomina Swyngedouw (2010). Desse modo, as estratégias escalares das ações coletivas não ficam circunscritas apenas às escalas de governo, embora, elas possam acionem suas demarcações para assegurar as vantagens oferecidas.

Essa é uma perspectiva que presente na criação do Codes-Sisal e na estruturação do Território do Sisal, que foi viabilizada pelas relações socioespaciais conduzidas pelas diversas modalidades de ações coletivas (associações, sindicatos e cooperativas), amadurecida através do entrelaçamento de suas histórias e das conexões viabilizadas através de apoios, parcerias, trocas e do compartilhamento de projetos políticos.

Importante reconhecer que, “[...] as escalas de regulação consagradas pela ação estatal definam parâmetros e normas para a atuação dos agentes sociais”, mas, as ações coletivas podem desenvolver “estratégias que se constituem em políticas de escala que conformam (e priorizam) outras escalas espaciais, como se constata no caso do Espaço Sisaleiro da Bahia” (Coelho Neto, 2021:266).

Outro exemplo marcante de ação coletiva fundada e que opera na escala regional é Agência Regional de Comercialização do Sertão da Bahia (Arco Sertão).

A Arco Sertão foi concebida, no ano de 2002, com o propósito de articular as cooperativas criadas pelo Programa Nacional de Geração de Emprego e Renda (PRONAGER) que enfrentavam enormes problemas que inviabilizavam sua sobrevivência. A estratégia adotada voltou-se para a criação de uma central de cooperativas para viabilizar a comercialização de suas cooperadas (Coelho Neto, 2021:274).

A Arco Sertão é uma organização-rede complexa, formada por cooperativas e associações de produção de agricultores localizados em vários municípios do semiárido baiano. Neste sentido, ela só assegura sua existência e funcionamento pela atuação dessas duas formas de ações coletivas situadas na escala local. Ela “se caracteriza pela complexidade de sua composição organizacional, pela amplitude de sua disposição espacial e pelo movimento ascendente de sua organização socioespacial” (Coelho Neto, 2021:274).

Nessa perspectiva, a Arco Sertão “[...] costura uma trama de relações socioespaciais, entrelaçando sujeitos e lugares e contribuindo para a construção de um tecido espacial conformado por relações de solidariedade” (Coelho Neto, 2021: 278). Este movimento complexo de articulação e operação nos permite pensar na ideia de produção de horizontalidades socioespaciais. Desse modo, as associações comunitárias e/ou produtivas, as cooperativas de produção, de serviços e de crédito, as centrais de associações, os sindicatos de trabalhadores rurais, as centrais sindicais regionais, como formas de ações coletivas podem ser interpretadas como promotoras de horizontalidades, no sentido empregado por Santos (2001, 2002 [1996], 2005).

Essas ações coletivas formam redes, estruturam e constroem suas tramas, articulam sujeitos e organizações sociais nas escalas local, produzindo uma configuração espacial de maior amplitude espacial. Elas mobilizam estratégias escalares para viabilização de seus propósitos, pois, como afirma Swyngedouw (2010: 57) “La redistribución y la reorganización constantes de las escalas espaciales son esenciales para las estrategias sociales y constituyen la arena donde se libran las batallas por el control y el empoderamiento”.

As experiências baianas de ações coletivas -e isso vale muito especificamente para o campo do associativismo- têm revelado uma estratégia eminentemente escalar. As organizações desenvolvem diversas ações conjuntas, articuladas, compondo modalidades diferentes de redes. Não se trata apenas da formação de ações coletivas que se fundam e se estruturam em escala regional, como são os casos das organizações-rede exemplificadas pelas centrais sindicais, de associações e de cooperativas, mas da formação de redes de apoio e de solidariedade em escala regional, costurando parcerias e formado aquilo que Scherer-Warren (2007:36) chamou de coletivos em rede, pois “[...] transcendem organizações empiricamente delimitadas, e [...] conectam, simbólica e solidaristicamente, sujeitos individuais e atores coletivos [...]”.

A atuação das ações coletivas, em suas estratégias escalares de mobilização, organização e operação, implica naquilo que Smith (1992), Delaney&Leitner (1997) e Marston (2000) designaram de produção social ou construção social da escala. Nesta perspectiva, como afirmou Swyngedouw², as escalas espaciais não são “fixed platforms for social activity and processes that connect up or down to other hierarchical levels, but are instead outcomes of those activities and processes, to which they in turn contribute through a spatially uneven and temporally unfolding dynamic” (Marston, Woodard & Jones, 2009:665).

² O texto mencionado é: Swyngedouw, E. (1997). Neither global nor local: ‘glocalization’ and the politics of scale. In K. Cox, ed, Spaces of globalization: reasserting the power of the local. New York: Guilford Press, 137-66.

Ações coletivas de base local e articulações na escala nacional e global

Ações coletivas que atuam na escala nacional e internacional, geralmente, se alimentam da existência, da mobilização e da organização de ações coletivas locais. Verifica-se no Brasil, redes de cooperativismo e sindicalismo que conformam federações e confederações, cuja existência depende das articulações locais e regionais. Há uma relação dialética entre os processos socioespaciais, implicando em um movimento de retroalimentação recíproco, em que as ações coletivas locais e regionais nutrem as ações coletivas nacionais e globais, e estas últimas potencializam as ações das primeiras.

Existem modalidades de ações coletivas que operam em escala internacional. Estes são os casos de modalidades de organizações não governamentais que se caracterizam como formas de ações coletivas globais. O Greenpeace, organização global presente em mais de 55 países, desenvolve campanhas globais coordenadas e articuladas por seus escritórios nacionais. A Anistia Internacional, organização global presente em 150 países, realiza campanhas globais direitos humanos. Com sedes em vários países/territórios, estas formas de ações coletivas desenvolvem ações, projetos e campanhas globais, centrando suas ações em temas e questões de interesse global.

No entanto, nós queremos enfatizar que, as ações coletivas, mesmo aquelas que têm uma base local de sustentação, constroem relações com outras escalas geográficas, acionando organizações sociais e recursos localizados em diferentes países. Este movimento viabiliza a realização de projetos e ações que se realizam nas escalas local e regional.

Marston (2010) problematiza o entendimento de que os “social processes can be detached from the grounded sites where people and objects concretely reside and social practices take place” (Marston, Woodard & Jones, 2009:666), como por exemplo o acontecer nas ruas, nos quartos e nas salas de reuniões. A autora propõe uma ontologia que se oponha a leitura de que os processos operam em escalas que pairam acima dos lugares.

Nesse sentido, é importante pensar em termos de uma dialética socioespacial, considerando que processos sociais produzem escalas e as escalas afetam a operação dos processos sociais, pois “[...] social processes and space-and-hence scales-mutually intersect, constitute, and rebound up on one another in an inseparable chain of determinations” (Marston, Woodard & Jones, 2009:666).

Os sindicatos de trabalhadores rurais, modalidade de ação coletiva com atuação circunscrita aos limites municipais, em conformidade com (e por obrigatoriedade) a legislação brasileira³, desenvolvem ações e se articulam para formar organizações nas escalas regional e nacional. Tendo seu funcionamento normativamente delimitado pelo território de cada município, estas formas de ações coletivas encontram na escala municipal a sua base territorial de sustentação, oferecendo amparo para articulações em outros níveis escalares, com a formação das federações e confederações sindicais.

Identificamos (Coelho Neto, 2021) no Território do Sisal (Bahia, Brasil), estratégias-rede operada por formas associativistas e cooperativistas de ações coletivas que atravessam outras escalas espaciais, acionando apoios solidarísticos na escala nacional e internacional. Esta constatação se torna mais contundente com as parcerias estabelecidas por duas das mais tradicionais e expressivas entidades do Território do Sisal: a SICOOB-COOPERE, cooperativa agrícola

³ O artigo 8º da Constituição Federal, em seu parágrafo II, estabelece claramente uma demarcação territorial para ação dos STRs: “é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município”.

de crédito, que mantém um fluxo mais intenso de trocas com a escala regional (mais frequentemente com rádios e associações comunitárias e com os sindicatos de trabalhadores rurais), e a APAEB-Valente, associação de produção, que estabelece uma forte densidade de relações com a escala nacional, mas, sobretudo, com a escala global.

A rede de cooperação e parceria tecida pela APAEB-Valente envolve uma diversidade de agentes sociais (ministérios e secretarias de governo, agências governamentais, bancos nacionais de desenvolvimento, fundações privadas internacionais, organizações não governamentais nacionais e internacionais, organizações religiosas, associações comunitárias, cooperativas de crédito), e apresenta um comportamento multiescalar, conformando rede de cooperação acionando instituições religiosas nucleadas na Europa Ocidental (Misereor⁴, Pão para o mundo [Brot Für Die Welt]⁵, Manos unidas⁶ e Cordaid⁷) e diversos apoios financeiros recebidos de fundações norte-americanas e europeias.

Essas experiências nos permitem pensar nas estratégias escalares como política de escalas, caracterizando-se por sua natureza multiescalar. Sustentando-se nas ideias de Passi (2004), Dallabrida (2010) apresenta uma síntese desse entendimento do seguinte modo:

As divergentes redes de relações sociais e interesses operam em todas as escalas, não restringindo sua ação em determinado âmbito espacial. [...] as escalas, como as regiões e as localidades, não são estáticas; são estruturas complexas, institucionalizadas socialmente, produzidas social e historicamente. São produzidas, existem e podem ser destruídas ou transformadas através das práticas sociais e lutas políticas. Se as escalas são formas de práticas sociais, são resultantes de relações de poder e de luta (Dallabrida, 2010: 189).

Diversos processos socioespaciais podem operar em várias escalas ao mesmo tempo, constatação que exige um movimento analítico que permita fazer as suas distinções operacionais nas escalas particulares. Por outro lado, qualquer processo em uma dada escala pode cruzar com outros processos que operam em quaisquer outras escalas. Estas constatações nos exigem um olhar transescalar.

Considerações finais

A busca pelo desvelamento dos sentidos que as ações coletivas têm nas diferentes escalas apontou três caminhos analíticos: (i) a construção de solidariedades comunitárias na escala local, (ii) a produção de horizontalidades socioespaciais na escala regional, e (iii) os apoios solidarísticos que articulam ações coletivas de base local com outras modalidades de ações que operam na escala nacional e global.

Algumas modalidades de ações coletivas estruturadas na escala local, cujos exemplos são as associações de bairro que atuam nas periferias urbanas ou associações comunitárias rurais que

⁴ “MISEREOR é a Obra episcopal da Igreja Católica da Alemanha para a cooperação ao desenvolvimento. Desde há mais de 50 anos, MISEREOR está comprometida com a luta contra a pobreza na África, Ásia e América Latina”. Recuperado de: www.misereor.org/pt/about-us.html

⁵ A “Pão para o Mundo” (Brot Für Die Welt) é uma agência de cooperação vinculadas às igrejas evangélicas regionais da Alemanha. Recuperado de: <http://www.brot-fuer-die-welt.de/home.html>

⁶ “Manos Unidas es la Asociación de la Iglesia Católica en España para la ayuda, promoción y desarrollo del Tercer Mundo. Es, a su vez, una organización no gubernamental para el desarrollo, (ONGD), de voluntarios, católica y seglar”. Recuperado de: <http://www.manosunidas.org/organizacion>

⁷ A Cordaid é uma organização da Igreja Católica de ajuda e desenvolvimento sediada na Holanda, com uma rede de cerca de mil organizações parceiras em 36 países na África, Ásia e América Latina. Recuperado de: [http://www.cordaid.nl/nl/\(12997\)--.html](http://www.cordaid.nl/nl/(12997)--.html)

atuam nos povoados, desenvolvem ações voltadas para (i) a busca de soluções para o enfrentamento de problemas comuns que afligem os lugares de vida dos sujeitos sociais organizados como ações coletivas, e (ii) para a busca de alternativas econômico-produtivas para assegurar suas condições materiais de sobrevivência.

Há modalidades de ações coletivas, como as centrais de sindicatos, de associações e de cooperativas, que operam na escala regional. Elas estabelecem alianças, compartilham experiências, constroem estratégias escalares, elaboram projetos e conectam lugares, permitindo-nos falar da produção horizontalidades socioespaciais.

As ações coletivas, cuja organização, estratégias e atuação estão estruturadas em termos nacionais e internacionais, se formam pela mobilização e articulação de outras formas de ações coletivas que têm uma ancoragem local e regional. As primeiras existem, se nutrem e se fortalecem pela atuação das últimas. Por outro lado, a atuação das modalidades de ações coletivas globais adquire significados nos lugares, encontrando nestes sua concretude histórica e geográfica.

Nessa perspectiva, consideramos que as escalas não estão dadas como um a priori à espera de serem descobertas, mas são construções que expressam a organização dos processos sociais, nos termos de González (2010). Essas estratégias escalares podem ser pensadas como processos que implicam em práticas socioespaciais, envolvendo a construção, a apropriação e a manipulação das escalas geográficas.

A reflexão elaborada neste texto empreende um esforço para oferecer uma leitura geográfica das ações coletivas, consistindo em uma abordagem escalar. Essa perspectiva, não elimina a possibilidade de interpretar a natureza espacial constitutiva das ações coletivas, desvelando sua geograficidade fundamental. Estes dois movimentos não precisam ser necessariamente separados, como aparecem nas divisões filosóficas do conhecimento ou como propõem alguns paradigmas geográficos. Considerar que a escala pode assumir uma posição de construto epistemológico não implica negar que as ações coletivas se apropriam das escalas como categorias de suas práticas socioespaciais.

Referências

- Brandão, C. (2010). Producción social del ambiente construido y sus escalas espaciales: notas para una teoría acerca de las acciones y decisiones de sujetos concretos. In: V. Fernández & C. Brandão (comp.), *Escalas y políticas del desarrollo regional: desafíos para América Latina* (pp. 241-272). Argentina: Miño y Dávila.
- Castro, I. E. (1995). O problema da escala. In: I. E. Castro (org.), *Geografia: conceitos e temas* (pp. 117-140). Brasil: Bertrand Brasil.
- Coelho Neto, A. S. (2018). Políticas de escala e a conformação de estratégias-rede das ações coletivas no espaço sisaleiro da Bahia. *Geographia*, 19, 39-53.
- Coelho Neto, A. S. (2019). Experiencias de asociativismo rural en el Territorio del Sisal-Bahía-Brasil: significados, resultados y desafíos. *Revista Derecho & Sociedad*, 5, 125-146.
- Coelho Neto, A. S. (2021). *A Geograficidade das Ações Coletivas: Rede, Política de Escalas e Territorialidade*. Brasil: Consequência.
- González, S. (2010). Las narrativas escalares de la globalización: neoliberalismo y ciudades competitivas. In: V. Fernández & C. Brandão (comp.), *Escalas y políticas del desarrollo regional: desafíos para América Latina* (pp. 123-149). Argentina: Miño y Dávila.
- Dallabrida, V. R. (2010). La escala en los procesos de gestión del desarrollo: revisión teórica, análisis de experiencias y aportes a la investigación. In: V. Fernández & C. Brandão (comp.), *Escalas y políticas del desarrollo regional: desafíos para América Latina* (pp. 185-216). Argentina: Miño y Dávila.
- Delaney, D. & Leitner, H. (1997). The political construction of scale. *Political Geography*, 16, 93-7.
- IBGE (2003). Metodologia do Censo Demográfico 2000. Brasil: IBGE, 2003. *Série Relatórios Metodológicos*, 25.
- Lacoste, Y. (2005). *A geografia-isso serve em primeiro lugar, para fazer a guerra*. 10. Brasil : Papirus.
- Lévy, J. (2019). Échelle. In: J. Lévy & M. Lussault (comp.), *Dictionnaire de la Géographie et de l'espace des sociétés* (pp. 308-309). France: Belin Éditeur.
- Jones, K. (1998). Scale as epistemology. *Political Geography*, 17, 25-28.
- Maciver, R. M. & Page, C. (1973). Comunidade e sociedade como níveis de organização social. In: F. Fernandes (org.), *Comunidade e sociedade* (pp. 117-131). Brasil: Nacional.
- Marston, S. (2000). The social construction of scale. *Progress in Human Geography*, 24 (2), 219-242.
- Marston, S., Woodard, K. & Jones, J. P. (2009). Scale. In: D. Gregory et. al. (comp.), *The dictionary of Human Geography* (pp. 664-665). 5th Edition. United Kingdom: Blackwell Publishers Ltd.
- Moore, A. (2008). Rethinking scale as a geographical category: from analysis to practice. *Progress in Human Geography*, 32(2), 203-225.
- Orain, O. (2004). La géographie française face à la notion d'échelle. Une approche par les significations et les contenus épistémologiques. In: M. C. Robic (comp.), *Echelles et temporalités en géographie* pp. 2-24). France: CNED.
- Paasi, A. (2004) Place and region: looking through the prism of scale. *Progress in Human Geography*, 28 (4), 536-546.
- Peruzzo, C. M. K. (2002). Comunidades em tempo de redes. In: C. Peruzzo, D. Cogo & G. Kaplún (comps.), *Comunicación y movimientos populares: ¿Quais redes?* (pp. 275-298). Brasil: Editora Unisinos.
- Robic, M.-C. (2004) Note sur la notion d'échelle dans la géographie française de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. *Cybergeo*, 264, 1-7.
- Sabourin, E. (2009). *Camponeses no Brasil: entre a troca mercantil e a reciprocidade*. Brasil: Garamond.

- Santos, J. S. (2021). *Associativismo e espaço urbano: relações territoriais no município de Serrinha/BA. (Dissertação de mestrado)*. Salvador, Brasil: Departamento de Ciências Exatas e da Terra, Universidade do Estado da Bahia.
- Santos, M. (2001). *Por uma outra globalização*. 5. ed. Brasil: Record.
- Santos, M. (2002). *A natureza do espaço: técnica e tempo; razão e emoção*. Brasil: Edusp.
- Santos, M. (2005). *Da Totalidade ao Lugar*. Brasil: Edusp.
- Scherer-Warren, I. (2007). Redes sociais: trajetórias e fronteiras. In: L. C. Dias & R. L. Silveira (orgs.), *Redes, Sociedade e Território* (pp. 29-50). Brasil: EdUNISC.
- Smith, N. (1992). Contours of a spatialized politics: homeless vehicles and the production of geographical space. *Social Text*, 33, 54-81. Recuperado de: <https://www.jstor.org/stable/466434?origin=crossref>.
- Souza, M. J. L. (2013). *Os conceitos fundamentais da pesquisa sócio-espacial*. Brasil: Bertrand Brasil.
- Swyngedouw, E. (1997). Excluding the other: the production of scale and scaled politics. In: R. Lee & J. Wills (eds.), *Geographies of economies* (pp. 167-176). United Kingdom: Arnold.
- Swyngedouw, E. (2010). Globalización o glocalización? Redes, territórios y reescalamiento. In: V. Fernández & C. Brandão (comp.), *Escalas y políticas del desarrollo regional: desafíos para América Latina* (pp. 47-75). Argentina: Miño y Dávila.
- Tönnies, F. (1973). Comunidade e sociedade como entidades típico-ideais. In: F. Fernandes (org.), *Comunidade e sociedade* (pp. 96-116). Brasil: Nacional.
- Tönnies, F. (1995). Comunidade e sociedade. In: O. Miranda (org.), *Para ler Ferdinand Tönnie* (pp. 231-352). Brasil: EdUSP.
- Tricart, Jean. (1952). La géomorphologie et la notion d'échelle. *Revue de Géomorphologie Dynamique*, 5, 213-218.

Sobre el autor

Agripino Souza Coelho Neto

agscneto@uneb.br Ricardo Ramos Shiota

Dr. em Geografía. Universidade do Estado da Bahia (UNEB/DCET I/PROET).